

EL GOBIERNO DE CATALUNYA EN TIEMPOS DE FELIPE II: ALGUNOS ASPECTOS DEL PRIMER VIRREINATO DEL PRIOR DON HERNANDO DE TOLEDO (1571-1574)

Santiago Fernández Conti
(Universidad Autónoma de Madrid)

1.- INTRODUCCION

Don Hernando de Toledo, hijo natural del III Duque de Alba y prior de Castilla en la Orden de San Juan de Jerusalén, desembarcaba en Santander los primeros días de octubre de 1570, procedente de Flandes. Cumplía así la real orden de traer a la península a la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria, que dejó en manos del arzobispo de Sevilla y el Duque de Béjar. No era la primera ocupación del prior. En su haber, un cuarto de siglo sirviendo al emperador y al monarca en variados escenarios -Francia, Italia, el Mediterráneo, los Países Bajos- siempre a la sombra de su imponente padre. Y con este bagaje, que le hacía esperar un destino acorde con sus pretensiones, se puso de nuevo a disposición del rey⁽¹⁾.

El 12 de abril de 1571, Felipe II firmaba en El Escorial los títulos que acreditaban a don Hernando durante los próximos tres años como nuevo virrey y Capitán General del principado de Catalunya y condados de Rosselló y Cerdanya, acompañados de las correspondientes instrucciones para ejercer tan altas responsabilidades⁽²⁾. El 23 de mayo, el prior juraba su cargo en la Seo de Lleida aunque, como era costumbre, volvió a repetir la ceremonia en Barcelona el lunes 28, al día siguiente de su entrada en la ciudad condal⁽³⁾. A pesar de su intención de no prolongar su estancia más allá del tiempo especificado en el título, de la decena de virreyes que empleó Felipe II en Catalunya durante su reinado fue el que más tiempo ocupó el cargo, nueve años divididos en cuatro mandatos⁽⁴⁾. Sin embargo, su gobierno es uno de los más desconocidos, dentro de la carencia de estudios en profundidad sobre los diferentes virreinos catalanes en tiempos de Felipe II⁽⁵⁾ -con alguna notable excepción⁽⁶⁾- que contrasta con la relativa abundancia de trabajos sobre el conflictivo encuadre de Catalunya en el complejo mosaico que conformaba la Monarquía de los Austrias⁽⁷⁾.

El objetivo de este trabajo es investigar las claves del gobierno real en Catalunya y los condados, a través de su figura más representativa, el virrey o lugarteniente gene-

ral. Este enfoque, que a algunos pudiera parecer restringido, no es sin embargo arbitrario. Entre la multiplicidad de factores intervinientes en las complejas relaciones que se daban en la Monarquía hispana entre el centro (Corte) y la periferia (los diversos estados que la componían)⁽⁸⁾, en nuestra opinión fueron las relaciones clientelares las que, en último extremo, condicionaron el éxito o el fracaso de la difusión del poder real; tema que, por otro lado, ya ha sido resaltado en la historiografía⁽⁹⁾, incluso para explicar en concreto la evolución política de Catalunya en la Edad Moderna⁽¹⁰⁾. Y en este entramado el virrey ocupaba un lugar destacado, porque es cierto que un cúmulo de circunstancias le impedían aparecer como fuente de merced y patronazgo, pero no lo es menos que intentó subsanar esta debilidad fundamental mediante la explotación de las posibilidades que le confería su capacidad de mediación con la Corte y, en consecuencia, el control, real o supuesto, del acceso a la *gracia* regia por parte de los catalanes.

Obviamente, el empleo de esta óptica requiere, además de un conocimiento básico sobre la propia trayectoria del prior (un militar castellano, en suma, perteneciente a uno de los linajes más significados del reino), el establecimiento del marco de relaciones políticas e institucionales en los que se desarrolló durante su mandato, tanto en la Corte como en el Principado. Y a la hora de elegir un campo para analizar su actuación, según los parámetros previamente fijados, el grave problema del bandidaje aparecía como el más interesante; no solo por ser una de las cuestiones que más preocupaban en la Corte sobre el gobierno de Catalunya, sino porque sus ramificaciones afectaban a todas las esferas de poder del principado, mostrándonos con nitidez las múltiples connotaciones de la dialéctica entre el centro y la periferia de la Monarquía.

2.- EL ESCENARIO: CENTRO Y PERIFERIA

A comienzos de 1571 estaba todavía muy presente la reciente crisis entre la Inquisición y la *generalitat*, desarrollada entre 1567 y 1570⁽¹¹⁾. El mismo prior, desde Flan-des, se había visto afectado en cierta medida⁽¹²⁾, y, en todo caso, los acontecimientos subsiguientes demostraron que las heridas permanecían abiertas, tanto en la Corte como en el principado.

2.1. *El contexto cortesano: crepúsculo, muerte y legado del cardenal Diego de Espinosa*

En el momento de su llegada a la Corte a finales de 1570, don Hernando pudo constatar el gran poder que todavía conservaba el cardenal Diego de Espinosa y las buenas relaciones que había mantenido con su padre durante los últimos años, pero también la actitud crecientemente hostil de la nobleza, encabezada por el Duque de Feria, baluarte del "partido ebolista"⁽¹³⁾. Sin embargo, a pesar de mostrar su buena esperanza en la mano del cardenal para encontrar un destino adecuado a su hijo, el duque se vio defraudado. Hubiese querido para el prior "...cargo, que fuera de más autoridad y menos trabajo y que, el que se tuviera en él, fuera en cosas que lucieran, y no de andar tras forajidos, y si guardan los fueros o no guardan los fueros". Porque el principado de Catalunya, si bien era considerado el de mayor rango entre los de la península ibérica, carecía del prestigio de los mandos italianos (Nápoles, Sicilia y Milán), que a comienzos de

1571 estaban así mismo en pleno proceso de renovación⁽¹⁴⁾. Es comprensible que el anciano duque abrigara esperanzas de contemplar a su vástago en aquellas tierras, tan ligadas a la Casa de Alba, pero no por ello dejó de aconsejarle que cumpliera adecuadamente con Dios y con el rey en su nuevo puesto⁽¹⁵⁾.

De modo que durante el primer año de don Hernando en Catalunya, el gobierno de la Monarquía estuvo dominado por el crepúsculo de la *privanza* de Espinosa. Pero el cardenal todavía retenía restos de su formidable influencia, y el prior comprendió que resultaba vital conservar la inteligencia con el poderoso ministro, así que en un principio el correo fluía desde Barcelona a su posada en Madrid, informando con detalle de todos los negocios del principado⁽¹⁶⁾. Incluso cuando, en noviembre de 1571, el prior enviaba a la Corte a su secretario, Antonio Anglés, para avisar del problemático estado en que había hallado Catalunya y los condados, las cartas de creencia que portaba el mensajero estaban destinadas tanto al rey como al cardenal⁽¹⁷⁾.

No tardó don Hernando en utilizar el medio de Espinosa para disfrutar de la *gracia* del monarca, que bien administrada debía materializarse en las mercedes oportunas. El trece de septiembre de 1571 fallecía en el monasterio de Sant Cugat del Vallés Ferrán de Cardona, conde de Palamós y almirante de Nápoles, oficio éste último que el prior se apresuró a solicitar en misiva al cardenal⁽¹⁸⁾. Pero horas más tarde llegaba a la ciudad condal la noticia de la muerte del Duque de Feria (ocurrida el día siete), uno de los más notorios enemigos de Espinosa y del Duque de Alba en la Corte. No es extraño, por tanto, que en carta al cardenal rogara el prior por el perdón divino para tan infausto cortesano, para a continuación interesarse por el puesto de capitán de la guardia española que quedaba vacante con el suceso. Servir en la casa del rey era un honor que deseaba más que ningún otro, a cuyo fin estaba dispuesto a renunciar a sus pretensiones sobre el almirantazgo de Nápoles⁽¹⁹⁾.

A lo largo de los meses siguientes, en los que no dejó de recordar sus peticiones al cardenal, todavía mostraba el prior cierta confianza en que "...cuando saliere de aquí me destinará Vuestra Señoría Ilustrísima para maiores cosas donde lo pueda mejor servir"⁽²⁰⁾, e incluso llegó a proponerse para servir a la vera de don Juan de Austria en el verano de 1572⁽²¹⁾. Sin embargo, la falta de respuesta positiva a sus peticiones (tanto el almirantazgo de Nápoles como el cargo en el entorno del hermano del rey fueron para el Duque de Sessa) comenzó a enfriar el ánimo de don Hernando, que sin duda era consciente del progresivo declinar de Espinosa en la Corte y sus desabrimientos declarados contra la nobleza. Hacia marzo de 1572 confesaba al cardenal que "dexo de escribir a V.S.I. a menudo por saber quantas cartas escribo a su Mag..."⁽²²⁾. De manera que no debe asombrar la descarnada reacción de don Hernando al conocer el abrupto fallecimiento del otrora todopoderoso ministro, que expresaba si tapujos en carta a su padre de 24 de septiembre de 1572:

"Ya V.Exc. avrá ya sabido la muerte del cardenal de Sigüenza y cuan arrebatada fue, que a sido cosa que a espantado mucho. Las cosas que aora dicen son arto para ver. V. Exc. no se pele las barbas por su muerte, pues no tiene por que, ny yo para que darle el pesame. Roguemos a Dios por otro que sea mejor para la casa de V.Exc., y si no es Velasco no pienso que puede ser mas ruyn el cual anda en predicamento ...nos libre de tan mala election que aquí no puede venir el Espíritu

Santo por más misas que el rey mande decir a gente y a tantas plegarias. Por esto que aunque sea tan ruyn no puede el rey dejar de sustentarse por bueno sin gran nota de la gente. Yo tengo para my anda la presidencia entre el de Cuenca, el de Segovia y el de Palencia. Todos son buenos sujetos, más después de hechos salen a la pega. Los más quieren decir que traerán a Granvela a la Ynquisición, más creo que lo será el de Tarragona porque membia el rey un pliego para el y sospecho que es para esto”²³¹.

Además de la opinión sobre el malogrado cardenal, el prior transmitía la sensación de vacío cortesano creado con su muerte y las cábalas que circulaban sobre sus sucesores, tanto en la suprema confianza del monarca como en los numerosos cargos que había acumulado. Respecto a estos últimos, barajaba los nombres de Granvela como Inquisidor General, y en la presidencia de Castilla a Gaspar de Quiroga. Sin embargo, lo realmente importante era adivinar la persona que iba a disfrutar de la gracia del rey durante los próximos años. Evidentemente, el prior tenía en cuenta al doctor Martín de Velasco, cuya estrella se había encendido al mismo ritmo que se apagaba la del cardenal; aludía también, sin citarlo expresamente, a otro personaje que rondaba la gracia del monarca. Muy probablemente se refería a Ruy Gómez de Silva, que por entonces reverdecía viejos laureles, acumulando enemistad con la Casa de Alba.

Pero Ruy Gómez de Silva murió pronto, el 29 de julio de 1573. Con no poca fruición, don Hernando transmitió la noticia a Flandes así como la situación de la “desconsolada” viuda, la intrigante princesa de Eboli²³². Velasco no sobrevivió en mucho al noble portugués (falleció en el mes de septiembre), y la situación en la Corte quedó abierta, fuertemente influida por el legado del cardenal Espinosa. En un primer momento, después de la ampliación de los Consejos de Estado y Guerra en noviembre de 1573²³³, el vacío cortesano en estos negocios fue henchido por el prior Antonio de Toledo y el II Conde de Chinchón, don Pedro de Cabrera y Bobadilla, a quienes sus oficios cortesanos (mayordomo y caballero mayor) les mantenían cerca del rey; el conde, además, como Tesorero General de la Corona de Aragón se erigió en hombre fuerte en los negocios de aquellos territorios, situándose por encima del Consejo de Aragón y de su vicescanciller, Bernardo de Bolea²³⁴.

En realidad, más allá de estos movimientos cortesanos, el factor que condicionó de forma decisiva la situación del prior durante estos años fue la desgracia de su padre, cuyo mandato en Flandes estaba siendo muy criticado tras el segundo levantamiento de Guillermo de Orange. Porque el prior don Antonio era siempre un apoyo fiel, pero estaba lastrado así mismo por su parentesco con Alba, y por añadidura el conde de Chinchón había sido el autor de un duro escrito contra la gestión del gobernador de los Países Bajos. En estas condiciones, fue magro consuelo para el prior que Juan Delgado, secretario del Consejo de Guerra y auténtico impulsor de aquellos negocios (pero carente de cualquier tipo de ascendiente político), se situara muy próximo a la casa de Alba.

Necesitado con urgencia de apoyos cortesanos para ejercer el gobierno y defender su propia carrera (no es casualidad que en mayo de 1572 el rey pidiera a García de Velasco, quien había servido como secretario en los negocios del principado, lo que “...sería bien advertir para mejorar el gobierno de Catalunya”²³⁵), don Hernando volvió

entonces su mirada a aquellos personajes que se perfilaban como los auténticos depositarios de la herencia de Espinosa: Antonio Pérez -secretario de Estado para asuntos de Italia, que se beneficiaría de la conflictiva relación con Roma dejada por el cardenal, derivada de la implantación del confesionalismo, para ofrecer sus servicios al Sucesor de San Pedro y aglutinar así la facción "papista" en la Corte hispana- y Mateo Vázquez, secretario personal del monarca, que comenzó a tejer su red entre los letrados formados por su antiguo patrón⁽²⁸⁾. Ambos se nutrieron además de la eclosión del sistema de juntas para la resolución de los asuntos de gobierno, y el papel que en su funcionamiento jugaron los secretarios en un primer momento⁽²⁹⁾.

Don Hernando habría de comenzar a cortejar a Pérez (en especial por su relación con don Juan de Austria, con quien deseaba servir el prior), para decantarse posteriormente por la facción de Mateo Vázquez; pero este proceso excede el ámbito cronológico de nuestro trabajo, pues tanto el "partido papista" como el "partido castellanista" sólo alcanzaron la madurez a mediados de la década⁽³⁰⁾.

2.2. La administración real en Catalunya y los condados

Estaba encabezada por el *lloctinent general* o virrey del Principado de Catalunya y Condados de Rosselló y Cerdanya, cargo al que se asociaba normalmente la capitania general⁽³¹⁾. Esta figura ha sido estudiada de forma exhaustiva por el profesor LALINDE, quien ha analizado sus funciones jurisdiccionales y gubernativas, pero también las fuertes tensiones a las que se veía sometido en su desempeño. La principal, sin duda, fue el debate entre la doctrina del principado, que lo tenía como un *alter nos* del monarca, y la posición de la Corte, que tendió a considerar al virrey un alto magistrado. De este modo, el virrey no solo estaba condicionado por la situación cortesana, como hemos visto en el epígrafe anterior, sino que en la misma tierra su campo de actuación se veía muy limitado por la vigilancia constante de las autoridades locales, en especial la diputación y el consejo del ciento, en defensa de la estructura constitucional del principado. Pero siempre tenía el recurso de acudir a las posibilidades de su cargo de capitán general.

En efecto, como el mismo don Hernando afirmaba al rey, "No tiene su Magestad en Catalunya otra jurisdicción que la de la capitania general, pues quanto a lo demás su Magestad les tiene jurado guardar los fueros..."⁽³²⁾. Era una opinión nacida de la experiencia del gobierno diario porque, si bien la función del tribunal de la capitania era velar por la seguridad del territorio (frontera con Francia, importante puerto del Mediterráneo y zona de paso para los correos) y ejercer la jurisdicción en este ámbito, era tentador acudir a tales poderes para solucionar por la vía ejecutiva determinados problemas, relacionados en especial con el bandidaje, aunque normalmente ello le acarrearía otro género de complicaciones posteriores.

Al igual que el rey en la Corte estaba asistido por el Consejo de Aragón y la cancelería, en Catalunya el virrey lo era por los componentes de aquellas instituciones (únicas) que residían en el principado, la *reial audiència i reial consell* y la cancelería⁽³³⁾. Presidida por el virrey, la audiencia era el máximo órgano jurisdiccional del principado y condados, aunque poseía así mismo un fuerte componente gubernativo. Durante el

virreinato de don Hernando atravesaba una etapa intermedia de su evolución. Entre 1565 y 1585 estuvo formado por dos consejos, civil y criminal: el primero se dividía en dos salas, con seis doctores cada una, presididas respectivamente por el canciller (que debía ser eclesiástico) y regente la cancellería; respecto al consejo criminal, estaba encabezado por el mismo regente la cancellería e integrado por ocho doctores, con menor rango y salario que los del civil. Existía además un abogado fiscal, con entrada para cuestiones legales de tales negocios, aunque a finales del virreinato del duque de Francavilla la audiencia había aceptado que se desdoblara el puesto, uno para la sala civil y otro para la criminal, "...aunque no sean del numero de los doctores del consejo"⁽³⁴⁾.

La relación del prior con la audiencia es una de las claves para entender su gobierno⁽³⁵⁾. En las instrucciones se le encomendaba la buena correspondencia con los doctores, a quienes debía aprender a conocer para mejor entender en los negocios. Don Hernando comprendió rápidamente que, como consejeros que eran del virrey, constituían un apoyo fundamental y, muy en especial, los integrantes del consejo criminal, instrumento básico para mantener el orden público⁽³⁶⁾. De hecho, a su llegada se encontró con una audiencia en precario debido al número de bajas en su seno (incluyendo la del canciller, por muerte de Guillem Cassador, obispo de Barcelona, en noviembre de 1570⁽³⁷⁾), situación que recordó en su primera carta al rey y en la que insistió durante los meses siguientes⁽³⁸⁾. Antes de que llegara la resolución de la Corte, el prior reconocía ya que Lluís Sorts, que a sus cuarenta años era el doctor más antiguo del consejo criminal y que lo presidía en ausencia del regente la cancellería, era hombre de su máxima confianza, compañía imprescindible en sus viajes fuera de Barcelona; se hablaba de que debía ser ascendido al consejo civil, circunstancia desaconsejada por el prior porque ello le impediría disponer de sus servicios como lo hacía hasta el momento, siempre y cuando se le compensara con una merced señalada⁽³⁹⁾.

Por fin, en carta de 5 de septiembre el rey anunciaba los nuevos nombramientos⁽⁴⁰⁾: en la sala del regente del consejo civil se daba entrada a dos doctores, que habían servido de asesores en la capitania general (Jeronimo Pascual en el lugar del fallecido Borrás, y Pere Balle, en sustitución de Miguel Terça, promocionado en diciembre de 1570 a abogado fiscal del Consejo de Aragón), en tanto que al consejo criminal accedía Damià Osset (en la plaza del desaparecido Ferrero); además, el puesto de abogado fiscal, vacante tras la muerte del doctor Camps, se desdoblaba entre un doctor del civil, como patrimonial (Pere Sabater) y otro del criminal (Martí Joan Franqueza, en quien el prior haría así mismo gran confianza⁽⁴¹⁾), perteneciendo ambos a las salas de la audiencia. La ausencia de Sorts avala el éxito de la maniobra de don Hernando, quien recordó inmediatamente la necesidad de recompensarle⁽⁴²⁾. El hecho de que la merced para Sorts tardara varios años en materializarse se debió sin duda al escaso predicamento que hacia 1572 tenía don Hernando en la Corte; al mismo factor cabe atribuir el que la elección final de canciller recayera en Francesc Montaner, hasta el momento regente la cancellería (y que, por cierto, necesitó de dispensa papal), cuyo nombre no encontramos entre los candidatos propuestos por el prior⁽⁴³⁾. Al año siguiente Bernabé Serra era ascendido al puesto dejado vacante por Montaner⁽⁴⁴⁾ y, con cierto movimiento de plazas, la audiencia quedaba conformada casi en su totalidad⁽⁴⁵⁾.

El cargo de gobernador del principado correspondía al heredero de la Corona en

ausencia del rey, y era ejercido en su lugar por el *portantveus de general governador*, también conocido como gobernador a secas⁽⁴⁶⁾. Dotado de amplios poderes judiciales en el territorio, por donde había de moverse constantemente, sustituía al virrey en caso de ausencia o muerte del monarca (gobernación *vicerregia*). El titular en 1571 era Pere de Cardona i de Requesens, que ejerció durante medio siglo (1543-1593) y cuya longevidad hizo escribir a Felipe II cuando le dieron la noticia de su muerte "Bien logrado que va, según hera viejo"⁽⁴⁷⁾. El prior buscó su apoyo y tanto él como su hijo Enric -que en ocasiones substituyó a su padre en el cargo, con tan buena fortuna, que en julio de 1574 fue nombrado oficialmente adjunto al mismo⁽⁴⁸⁾-, fueron objeto de sus alabanzas ante el rey⁽⁴⁹⁾. Disponía de un asesor (cargo que a finales de 1572 fue ocupado por Francesc Puig, por fallecimiento de Gabriel Maduxer⁽⁵⁰⁾), así como de alguaciles y porteros.

Los condados de Rosselló y Cerdanya tenían así mismo un gobernador, con funciones similares. Cuando llegó don Hernando hacía décadas que lo era Carles Doms, quien por aquellos días mantenía un enfrentamiento abierto con Joan Francesc Page, que hacía imposible el buen gobierno de la zona. En realidad, en la Corte ya se había tratado la destitución de Doms, y el prior la recomendó con vehemencia, aunque procurando una salida honorable para él y su familia⁽⁵¹⁾. Pero murió a finales de 1571 y el virrey asignó el cargo temporalmente a Antón Doms, barón de Sancta Pau, y que había sido lugarteniente general en la frontera con el Duque de Francavilla. Con todo, existía el inconveniente de las malas relaciones entre Anton y los hijos del finado quienes, considerando que el cargo había estado en la familia desde tiempos de su bisabuelo, intentaron estorbar el nombramiento⁽⁵²⁾. Finalmente, el monarca dio el puesto al Barón de Eril, quien demoró varios meses su incorporación, para renunciar al poco tiempo⁽⁵³⁾. Entre los oficiales del gobernador destacaba el abogado fiscal, Pere Ros, que hasta su muerte a finales de 1571 acumuló también en su persona la asesoría de la procuración real de los condados. El prior confió ambos cargos de forma interina a Pere Bayle (que ya lo servía por incapacidad del finado) pero a comienzos de 1572, sin consultarle y muy contra su voluntad -como no dejó de informar a Espinosa-, el rey ordenó su división entre Bayle (asesoría) y Francesc Vidal Descamps (abogado fiscal)⁽⁵⁴⁾.

Los encargados de administrar y defender el escaso patrimonio real en Catalunya y los Condados eran, respectivamente, el *batlle general* y el *procurador real*⁽⁵⁵⁾. Lluís d'Icard i Agustí, señor de Torredembarra fue el batlle general entre 1551 y 1580, asistido por un lugarteniente, asesores y escribanos⁽⁵⁶⁾. Don Hernando también procuraría mantener buenas relaciones con este personaje y lo recomendó vivamente al monarca ("...es hombre de valor y muy bien quisto por allá"), a pesar del pleito que se alargaba en la audiencia sobre la pretensión de la villa de Almenar, cuyo señorío ostentaba, de liberarse y pasar al dominio real⁽⁵⁷⁾. Respecto a los condados, el cargo de procurador estaba ligado a la familia Llupià, cuyo titular en esta época, Lluís, tenía por lugarteniente a Jaume Orelles, y, como hemos dicho, a Pere Bayle de asesor, con quien parece que no se entendía bien el procurador⁽⁵⁸⁾.

La administración de las finanzas reales, y todos sus oficiales, estaba controlada por el *Mestre Racional*, puesto ocupado por Francesc de Montcada, Conde y primer Marqués de Aytona. El conde, que se había distinguido en la defensa de los postulados reales en las cortes de 1564⁽⁵⁹⁾, lo había heredado de su suegro, Francesc de Gralla y Des-

plá quien, al parecer, había obtenido del Emperador facultad para traspasarlo tras décadas de servicio (1532-1567)⁽⁶⁰⁾. Su lugarteniente en el oficio era Jaume Traginer⁽⁶¹⁾. La plantilla que manejaba las finanzas reales se completaba con el regente la tesorería, puesto que era desempeñado por Pere Bernat Codina, si bien a los pocos meses pidió permiso para visitar la Corte (quedando en su lugar su cuñado, Miquel Joan Grau) y el prior entendía que su intención era dejar el cargo a corto plazo⁽⁶²⁾.

Todo el territorio (excepto el valle de Arán) se dividía en *vegueries* y *sots-vegueries*, cuyos titulares eran los oficiales reales de nivel inferior, en tanto que las *batllies* se referían al ámbito local. Vegueres y sots-vegueres, con mandato normalmente trienal, tenían funciones jurisdiccionales y administrativas y eran nombrados por el monarca entre los propuestos por el virrey⁽⁶³⁾. En febrero de 1572, don Hernando escribía a Felipe II que tenían un importante papel que jugar en la represión del bandolerismo⁽⁶⁴⁾: "...uno de los cuales [remedios] y mas nescarios me ha parecido ser tener buenos vegueres y oficiales, porque por lo pasado han sido tan floxos y a veces de tan poca qualidad que no solo no han sido parte para remediar que no se hiciessen gravissimos delitos en sus distritos y veguerías, pero con el poco respecto que les han tenido se iba acrecentando este daño cada día...". La causa de ello, añadía el prior, era la carencia de salarios, y así algunos caballeros importantes que había tanteado para estos puestos no lo habían aceptado; como solución, proponía acudir al siempre sustancioso recurso de la *gracia* del monarca, quien debería escribir personalmente a cada uno de los candidatos, con promesas de acordarse de sus servicios.

Existían otros cargos importantes en la administración, como el de archivero real, que el rey concedió a Antonio Viladamor a comienzos de 1572 (con facultad aneja para que lo tuviera en su lugar Gabriel Olicina⁽⁶⁵⁾) pero, en su conjunto, hemos presentado de forma somera el esqueleto del gobierno real en Catalunya. Además, mientras los oficios temporales (veguers, sots-veguers, batlles, sot-batlles) eran sometidos a la inspección de los *judges de taula*, los perpetuos (a excepción del virrey) eran objeto de un procedimiento de control previsto en las constituciones del principado⁽⁶⁶⁾. A estos últimos, los "...oficiales de justicia y patrimoniales", pero también a la forma de nominación y de ejercer la taula de los primeros, apuntaba Felipe II cuando el diez de febrero de 1572 firmaba los títulos oportunos para nombrar "visitador comisario y juez de residencia" a Martín Martínez del Villar, arzobispo de Sassari (Cerdeña) y electo obispo de Barcelona⁽⁶⁷⁾. El catorce de abril llegaba a la ciudad condal y, tras presentar en la *generalitat* la comisión real, el día 28 juraba su cargo de visitador ante el virrey, presentes el veguer y el *conseller en cap* de Barcelona; a continuación, el cinco de mayo mandaba proclamar la visita por todas las veguerías, para que en un plazo de treinta días se expusiesen las quejas y agravios contra los oficiales, y proceder a continuación a su averiguación⁽⁶⁸⁾.

El proceso no careció de incidencias. Por ejemplo, don Hernando intervino para defender la jurisdicción militar cuando el prelado intentó escudriñar en cierto negocio de una nave con mercancía de contrabando⁽⁶⁹⁾. Así mismo, Felipe II ordenó al obispo investigar ciertas conexiones de familiares de los doctores de la audiencia, contrarias a la ley⁽⁷⁰⁾. Y hubo problemas con dos personajes destacados pues, a pesar de presentarse cargos contra los mismos, se entendía que los capítulos de Corte no permitían su inves-

tigación, por no servir ya en el principado: Miguel Terça (que del consejo civil había sido promocionado, como ya se dijo, al Consejo de Aragón) y Bernat Joan Poll (antiguo doctor del criminal, que en ese momento ejercía de regente la cancellería en Valencia); pero mientras el primero, bien protegido en la Corte, veía levantados sus culpas, el segundo fue investigado por otras vías⁽⁷¹⁾. En todo caso, en febrero de 1573, concluidos los procedimientos oportunos, se disponía ya de una lista de personas "contra quien se a publicado la visita", que incluía jueces de la audiencia civil, oficiales de la gobernación, baylía general, procuración real de Roselló y Cerdanya, maestre racional y administración de Girona⁽⁷²⁾. El 17 de marzo, como ordenaban las constituciones, el prelado partía hacia la Corte para presentar la documentación⁽⁷³⁾, y las sentencias eran publicadas el 26 de noviembre de ese mismo año⁽⁷⁴⁾.

2.3. La representación de la comunidad

En enero de 1579, intentando proteger a uno de sus oficiales de los ataques de la ciudad de Perpinyà, don Hernando definía con una frase llena de elocuencia la sensación que le embargaba después de tratar durante siete años y medio con los representantes del principado: "...es tan martir en Catalunya como yo..."⁽⁷⁵⁾. Naturalmente, la percepción de la capital del Roselló era muy otra, cuando poco después comenzaba una carta al rey denunciando que "no parara lo prior don Ferrando de agraviar esta pobre terra..."⁽⁷⁶⁾. Este ejemplo nos muestra el resultado final de la historia de un desencuentro, probablemente inevitable, entre un virrey castellano y las autoridades de la tierra (tanto la *generalitat* como las diferentes universidades, en especial Barcelona), cuyas visiones de lo que debía ser el servicio real diferían de forma radical.

La *disputació del general*, también conocida abreviadamente como *generalitat*⁽⁷⁷⁾, era una comisión permanente de las Cortes, compuesta por tres diputados y tres oidores de cuentas, elegidos el día de Santa María Magdalena (22 julio) por un período de tres años, y pertenecientes a los brazos eclesiástico, militar y real. Estaban encargados de representar la nación catalana y defender el erario público de Catalunya y la legalidad vigente, representada en el conjunto de las constituciones y otros derechos, que desde 1564 estaban en pleno proceso de revisión y ordenación por una comisión de doctores de la audiencia⁽⁷⁸⁾. En 1571 ejercían como diputados Benet de Tocco (obispo de Girona), Francesc d'Alentorn y Joan Perpinyà (burgués de Perpinyà, que había sustituido desde el seis de abril de 1571 al fallecido Nadal Ciurana⁽⁷⁹⁾), en tanto que oidores lo eran Antoni Delgado (canónigo de Tarragona), Galcerán Gravalosa (doncel de Cervera) y Joan Gomis (mercader de Barcelona). Durante el año que tuvo que tratar con ellos, el prior terminó muy sentido, hasta el punto de que en la carta en la que comunicaba al rey la nueva elección, en 1572, expresaba su ferviente deseo de que "Dios les dexe administrar estos cargos con mejor forma que han dexado los pasados"⁽⁸⁰⁾. Los elegidos fueron, como diputados, Jaume Cervero (canónigo de Tortosa), Enric Agullana (doncel de Barcelona) y Joan Bolet (burgués de Perpinyà); y por oidores Joan Espuny (canónigo de Barcelona), Galcerán de Vallgornera (doncel de Perpinyà) y Jaume Fortuny (ciudadano de Tortosa). Pero, a la postre, no parece que sus esperanzas se vieran cumplidas⁽⁸¹⁾.

En ejercicio de sus funciones, la diputación acostumbraba a enviar embajadas a todas aquellas instancias donde consideraba que debía ser escuchada, principalmente la Corte, pero también, por ejemplo, a Roma⁽⁸²⁾. Así, Alentorn y Tocco se hallaban en Madrid cuando fue nombrado don Hernando, en embajada oficial para felicitar a Felipe II por su casamiento, y entraron en Barcelona un día después que el prior⁽⁸³⁾. Con el tiempo, esta práctica llegaría a irritar profundamente a don Hernando, pues no sólo se saltaba su autoridad, sino que se hacía un gasto inútil al erario de aquel organismo⁽⁸⁴⁾. La opinión de don Juan de Zúñiga, embajador ante su Santidad, no distaba mucho de la del prior, e intentó infructuosamente que el Papa forzara la salida de los agentes de la diputación de la Ciudad Eterna⁽⁸⁵⁾. También en la Corte los ministros buscaban fórmulas para estorbar estas acciones⁽⁸⁶⁾, aunque nunca lograron impedir a la diputación el legítimo ejercicio de sus derechos. De modo que, durante el primer virreinato de don Hernando, se despacharon varias embajadas, de las que iremos dando cumplida cuenta.

Diputados, oidores y otros oficiales de la *generalitat* eran sometidos a visita al término de su mandato, por parte de sus sucesores en los cargos⁽⁸⁷⁾. En 1572 comenzó el proceso, si bien, con el fin de no perturbar las conversaciones que en ese momento tenían lugar entre virrey y diputación para la persecución de los bandidos, don Hernando, con la aprobación de Felipe II, decidió no presionar en su ejecución⁽⁸⁸⁾. En mayo de 1573 los doctores del consejo criminal, requeridos por los diputados, comenzaron a ir regularmente al consistorio para ver la visita⁽⁸⁹⁾; sin embargo, el prior opinaba que se trataba de una maniobra para distraer al consejo en la causa del receptor del general. "...que se halla haverle defraudado en muchos millares de ducados, y que con sus sentencias ampliarían mucho su jurisdicción, y como han visto que los dichos consejeros havyan caído en la cuenta, han sobreseydo en la dicha visita y tratan de concertar con el dicho Sancho, mereciendo ser privado del officio y de la vida, yo les iré a la mano..."⁽⁹⁰⁾. En consecuencia, comenzó a sugerir al rey que urgiera a la *generalitat* en la realización de la visita, como no dejó de hacer el monarca, con agudos apremios⁽⁹¹⁾. Por fin, los diputados comunicaron al monarca que la sentencia se había publicado el 25 de agosto de 1574⁽⁹²⁾.

La rica ciudad de Barcelona era por sí sola uno de los principales poderes de Catalunya⁽⁹³⁾. Estaba encabezada por el Consell del cent, amplio cuerpo integrado por más de cien representantes de los diferentes componentes de la sociedad barcelonesa⁽⁹⁴⁾. La gestión diaria quedaba en manos de los cinco *consellers*, dirigidos por el *conseller en cap*. Utilizaba así mismo con profusión el recurso a las embajadas reales, como la que enviaron a la Corte en 1572 con Galcerán Cahors y Jeroni Magarola al frente, con diversas peticiones⁽⁹⁵⁾. Sus relaciones con la administración real eran a menudo problemáticas. A los pocos días de su llegada, don Hernando tuvo que intentar aplacar a un iracundo *conseller en cap*, que no soportaba que el gobernador Cardona hubiera usado en la vigilia de Sant Jordi una almohadilla para arrodillarse a su lado en la iglesia⁽⁹⁶⁾. Simultáneamente colisionaban los *consellers* de Barcelona por un lado y el gobernador y la audiencia por otro, a raíz del sitio que debía ocupar en el *juí de prohoms* (privilegio de la ciudad condal para juzgar causas criminales en ausencia del monarca o del virrey) bien Cardona cuando entrara *viceregia*, bien el doctor de la sala criminal y el asesor del gobernador para hacer relación de alguna causa en el mismo⁽⁹⁷⁾. Ambas cues-

tiones, entre otras, merecieron el envío de una embajada de Barcelona a la Corte, encabezada por Francesc Gamis⁽⁹⁸⁾.

3. EL GOBIERNO DE DON HERNANDO: EL PROBLEMA DEL BANDIDAJE

Después de la buena administración de justicia, en las instrucciones de Don Hernando recibía atención prioritaria el orden público pues, como se reconocía en el pliego, “aquella tierra está tan llena de delados, facinerosos y malos hombres...” que era necesario su control y persecución, investigando incluso sus posibles conexiones con el gobierno del principado. Estas líneas no son muy diferentes de las que encontramos en las sucesivas instrucciones a los distintos virreyes, revelando lo que constituyó uno de los principales problemas de Catalunya en la Edad Moderna⁽⁹⁹⁾. La miseria y la enfermedad, combinadas con el crecimiento demográfico, las dificultades orográficas, las rencillas nobiliarias y la cercanía de la frontera francesa, convirtieron al bandidaje en un fenómeno endémico, que llegó incluso a amenazar el sistema de comunicaciones de la Monarquía⁽¹⁰⁰⁾. Además, como rezaba el punto 37 del documento citado, para combatirlo el prior debía buscar la colaboración de los señores de vasallos, tanto eclesiásticos como seglares -que, en conjunto, sumaban buen parte del territorio- y respetar su jurisdicción, aunque ésta última recomendación suscitaba muchas prevenciones en el monarca, muy celoso de sus regalías.

3.1. “...la forma que se ha de tener para castigarlos”

Del empeño que don Hernando puso desde un principio en la persecución del bandidaje dan fe dos medidas que tomó antes incluso de jurar su cargo. Hizo que el consejo criminal fuera a Lleida a esperarle, para estudiar el problema y tomar las primeras disposiciones, aunque la necesidad de atender la venida de los archiduques Ernesto y Rodolfo a la postre le impedirían llevar a cabo sus propósitos (por cierto, que para su llegada y la de don Juan de Austria tuvieron que tomarse precauciones especiales contra los bandidos en el camino real). Así mismo, ordenó desde Madrid el traslado a Barcelona de Vidal Brunet, notable bandido apresado en el valle de Arán, aunque la negativa del gobernador (en opinión del prior, presionado por los del lugar quienes preferían que fuera ejecutado “in situ” para que no revelase sus conexiones) sería el inicio de un largo contencioso entre las autoridades del valle y la Corona⁽¹⁰¹⁾.

Una vez en Barcelona, se dispuso a aplicar los medios necesarios para el alivio de una tierra que, como escribió a Espinosa el 2 de junio, había encontrado “... arto trabaja de la poca seguridad de los camynos...”⁽¹⁰²⁾. Y los remedios pasaban no sólo por los variados instrumentos que la legislación ponía en sus manos para actuar sobre el terreno, sino también por las acciones en otras esferas, tendentes a crear el marco necesario para facilitar el éxito de su misión. Entre estas últimas, pidió y obtuvo del rey comisión para despachar a las islas a los delincuentes condenados a destierro, aunque Felipe II era de la opinión que estaban mejor en el servicio de galeras⁽¹⁰³⁾. Además, don Hernando insistió en la necesidad de acabar con el hecho de que los facinerosos pudieran acogerse a beneficios eclesiásticos para alegar inmunidad ante la justicia real. Más adelante examinaremos el caso de Marc Antoni Forner, que el prior vivió en sus carnes; pero,

en realidad, existían ya breves pontificios sobre la materia⁽¹⁰⁴⁾, y antes de la entrada del prior, el 5 de febrero de 1571, Felipe II escribía a su embajador en Roma para que el Papa publicase un nuevo breve, que cubriera ciertas inconsistencias detectadas en los primeros⁽¹⁰⁵⁾. Sin embargo, un año más tarde debía repetir la gestión, al tiempo que despachaba una carta a los obispos catalanes para que tuvieran muy presente el negocio⁽¹⁰⁶⁾; por fin, en marzo de 1573 el Sumo Pontífice expedía el documento deseado "...para que los clérigos de primera tonsura y que tuvieran beneficios sin ser constituidos en órdenes sacras y huviesen sido bandoleros o receptadores dellos, no gozen de inmunidad eclesiástica", aunque era más restringido de lo que sería deseable⁽¹⁰⁷⁾.

También se requirió el apoyo pontificio en la persecución de los duelos entre caballeros que, en opinión del prior, fomentaban el bandidaje debido a la necesidad de alimentar los bandos que creaban estas rivalidades, las denominadas *guerras privadas*, con todos los daños que ello traía consigo para la población⁽¹⁰⁸⁾. Dado que esta práctica había sido prohibida en el concilio de Trento, don Hernando insistió desde el principio en que el rey obtuviera del papa una declaración expresa para castigarla, y no dejó de recordarlo a la Corte⁽¹⁰⁹⁾. Sus esfuerzos fructificaron al final de su mandato cuando, en mayo de 1574, el embajador Juan de Zúñiga enviaba desde Roma el breve solicitado para sancionar, más allá del acto del duelo (ya penado) a los que "...truxeren vandos en la Corona de Aragón (...) ansy a ellos como a los príncipes y jueces que lo permitieren", y se les relevaba de cualquier juramento que tuvieran hecho de observar costumbre en estas materias⁽¹¹⁰⁾; aunque Zúñiga, cuya madre pertenecía a la más rancia nobleza catalana, manifestó sus temores de que esta última medida fuera tomada por las autoridades del principado como "...introducion para que se deroguen otros".

Entre los instrumentos disponibles para combatir el bandidaje sobre el terreno, las posibilidades no eran pocas. Así, para lidiar contra los fautores -aquellos que protegían y daban cobertura a los malhechores- tenía a su disposición una batería de medidas legales que permitían el derribo de sus casas, medida al parecer eficaz para disuadirles de sus perniciosas querencias. Desde el comienzo, el prior confió la tarea a Franqueza y Quintana, del consejo criminal, que parece obtuvieron resultados a su gusto⁽¹¹¹⁾. Con todo, en junio de 1573, tras la ejecución final del bandido Brunet en el valle de Arán, y dado que la tierra estaba aliviada de ladrones, el prior propuso emprenderla de nuevo con los fautores⁽¹¹²⁾. Desde la Corte se le contestó diciendo que hiciera lo que más conviniera "...al beneficio y quietud de la tierra".

Otra vía de actuación era el *sometent*, o la obligación que tenían todos los hombres hábiles de acudir a la llamada de la autoridad competente para combatir a los malhechores. Don Hernando levantó *sometent general* el 12 de agosto, pero sus peores temores se vieron confirmados al escribir al rey que 50 bandidos bastaban para retirar a 200 de los convocados, pues además se entreveraban relaciones de sangre y amistad entre unos y otros⁽¹¹³⁾. Una especie de *sometent* ampliado, que superaba el problema de las jurisdicciones particulares, era la *unió*, un acuerdo para perseguir malhechores que, impulsado por el virrey parece que había sido puesto en práctica por vez primera muy recientemente, en tiempos del Duque de Francavilla, cuando había sido regulado mediante pragmática real (1565)⁽¹¹⁴⁾. Y lo fue sin mucho éxito, al igual que sucedió entre la salida del Duque y la llegada de Toledo, meses en los que la audiencia y el

gobernador trataron de ponerla en marcha. Esta opción era recomendada por Felipe II en las instrucciones que le dio a su nuevo virrey de palabra y por escrito y el prior, tras acometer el intento y topar con la negativa de Barcelona, manifestó una fe muy escasa en este remedio⁽¹¹⁵⁾.

3.2. *La implicación de los caballeros*

De modo que, con el fin de obtener resultados inmediatos y dando fe de su espíritu militar, el prior decidió acudir a la nobleza, que ostentaba gran parte de la jurisdicción en el principado. Tras algunas conversaciones, logró convencer a un grupo de caballeros para que comandaran un cierto número de hombres en zonas estratégicas⁽¹¹⁶⁾. No le defraudaron e hicieron su efecto -don Hernando obtuvo del rey cartas de agradecimiento para cada uno de ellos⁽¹¹⁷⁾-, y el prior complementó la acción militar con el envío de dos doctores de la audiencia, que visitaron las zonas más frecuentadas por los facinerosos para hacer las diligencias oportunas. En febrero de 1572, el virrey pudo así escribir a Felipe II que "...pasan de trescientos ladrones los que se han degollado y muerto, y los demás se retiraron a Francia y Aragón, con lo qual quedó pacífica la tierra" a pesar de pequeños robos esporádicos, que era imposible impedir⁽¹¹⁸⁾.

Sin embargo, pronto empezaron los problemas. En la misma carta en la que resumía los logros, advertía de la entrada de nuevas cuadrillas desde Aragón que, si bien de momento no revestían mucho peligro, obligaban al levantamiento de más hombres, para atajar el mal de raíz. Dado que la tesorería estaba exhausta, el virrey puso 300 ducados de su pecunio para pagar un centenar de hombres. Pero, en esta ocasión, los caballeros se negaron a servir más, tanto por el gasto de su hacienda como por el desprestigio que sufrían ante "...sus deudos, amigos y del pueblo [que] les dicen traen officio de barracheles [jefe de alguaciles] de que andan sentidos". Para subsanar la dificultad, don Hernando propuso dignificar sus funciones con el nombramiento de maestros de campo o coroneles, con sueldo de 200 libras al año (sugerencia aprobada por el Consejo de Aragón, con mención a su despacho por la vía del Consejo de Guerra), lo que implicaba además la automática eliminación de las dudas sobre su adscripción a la jurisdicción militar; pero, debido a lo excepcional de la medida, el título se debía ofrecer únicamente en un principio a Onofre d'Alentorn⁽¹¹⁹⁾.

Este, empero, en quien se había pensado para permanecer en la raya de Aragón con medio centenar de hombres, no aceptó el nombramiento militar, pero para entonces el rey había ampliado a dos los títulos de esta naturaleza que estaba dispuesto a expedir⁽¹²⁰⁾; así que Ramón Torrelles quedó con 50 soldados en la frontera con Francia, hecho que don Hernando supo agradecer con una oportuna mediación en la Corte⁽¹²¹⁾. Con todo, da medida de las dificultades que encontraba el prior el que la segunda patente de maestre de campo, enviada en blanco a Barcelona para que fuera rellenada por la persona que creyera más conveniente, nunca llegara a utilizarse⁽¹²²⁾. Para complementar estas medidas, don Hernando había solicitado así mismo una compañía de caballos del reino de Granada (asunto que el Consejo de Aragón remitió al de Guerra, y que finalmente no fue aprobado⁽¹²³⁾), así como que se escribiese al bayle general de Aragón para que adoptase las medidas oportunas en la frontera de aquel reino.

El rey así lo hizo⁽¹²⁴⁾, pero, en realidad, en Aragón hacía tiempo que se estudiaban medidas⁽¹²⁵⁾. De modo que, cuando a mediados de junio de 1572 el prior recibió cartas de Felipe II, virrey y diputados de Aragón, informándole de que el día 22 del mismo se iba a levantar un gran número de gente de infantería y caballería, pagada por la diputación, para perseguir a los bandidos, por lo que solicitaban su colaboración, don Hernando, debido a la negativa de Alentorn y el resto de los caballeros, no disponía de gente a sueldo en la zona y carecía de tiempo para juntarla⁽¹²⁶⁾. Pero actuó con suma rapidez. Mandó un emisario por la posta a Zaragoza para pedir una demora de dos semanas en el comienzo de las acciones pero, previendo su inutilidad (como así fue), despachó a Lleida de inmediato a Franqueza, del consejo criminal. Tenía orden de prevenir toda la zona de la raya fronteriza, mediante la declaración de *sometent* en las veguerías afectadas, con especial cuidado en la cobertura de los pasos de los ríos Ebro, Segre y Noguera. El prior envió así mismo, para dar calor a los pueblos y asistir personalmente en la persecución, al batlle general, Lluís d'Icard.

Franqueza llegó a su destino el día veinte, y la mañana siguiente ya había ordenado la marcha de 70 arcabuceros de la ciudad para prevenir el ataque de una banda de 13 facinerosos a los campesinos de Urgell. El 22, confirmado el inicio de las operaciones en Aragón, Franqueza apercibió toda la zona, encontrando gran colaboración entre los habitantes, e intentó sin éxito comunicarse con el gobernador de Aragón, Juan de Gurtea, para coordinar ambos lados de la raya. También inició gestiones para que varias ciudades de la región pagasen hombres armados para asegurar la persecución, más allá del *sometent*. Con tan buena fortuna que los trece delados fueron expulsados hacia Aragón -donde, para indignación del prior, todavía no había gente armada para interceptarlos-, además de llegar a un acuerdo con Lleida, Balager, Tárrega y Agramunt para costear un centenar de hombres durante diez meses. Por su parte, Lluís d'Icard entró en Lleida el 28 de junio. Dos días más tarde se entrevistaba con el gobernador de Aragón, que por fin llegó con sus fuerzas. La falta de entendimiento entre ambas autoridades desembocó en la marcha de los aragoneses, aunque una inmediata fechoría de los facinerosos los volvió a unir, y juntos dieron caza a los bandidos a principios de julio. Terminadas las operaciones, el día catorce Franqueza regresaba a Barcelona a informar al prior, en tanto Lluís d'Icard partía hacia Almenar.

Teniendo en cuenta los recursos disponibles, el resultado de las dos semanas de actividad había sido más que satisfactorio para el prior, que por otro lado tomó nota de la positiva actitud de los diputados de Aragón (meses después intentaría que éstos convencieran a sus homólogos catalanes para abrir la bolsa en las condiciones pretendidas por el virrey). Pero no lo había sido tanto para las autoridades aragonesas, cuya gran ostentación de medios no se correspondía con el fruto obtenido. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo que se ocupaba de coordinar estas acciones sobre el terreno, don Hernando tuvo que hacer frente a una severa reprimenda desde la Corte por su actuación en la represión de los bandidos desde su llegada al virreinato⁽¹²⁷⁾. En efecto, se le acusaba, entre otras cosas, de poca diligencia en la puesta en práctica de la *unió* (que el rey entendía como el mejor remedio), no implicarse personalmente ni él ni el gobernador en la persecución del bandillaje, y nulo respeto a la jurisdicción de los barones en sus tierras (aunque, en este último punto, es muy significativo que el rey añaa-

diera de su propia mano que "...lo que aquí se dice que consintais a los pueblos y barones que ellos mismos hagan justicia, podría ser de inconveniente y perjudicial a mis regalías, y usareis en ello con el tiento que convenga, mirando que por ganar en una parte no se pierda por otra"). Quizá fue esta polémica la que llevó al gobernador de Aragón a tratar de justificar su fracaso en la falta de apoyo desde Catalunya, actitud que don Hernando no se privó de calificar con acritud, enviando a Gassol una detallada memoria de los hechos⁽¹²⁸⁾.

La interpretación de este embate debe hacerse en clave política. Como ya vimos, en la primavera de 1572 don Hernando perdía gran parte de su cobertura cortesana al enfriarse de forma considerable su relación con Espinosa. Ello le puso a merced de sus enemigos, en especial Ruy Gómez, que no dudaron en utilizar el delicado problema del orden público para atacarle y debilitar su posición, sabedores de que Felipe II era extremadamente sensible a estas cuestiones. Sin embargo, el elocuente discurso que hizo el prior en su defensa, ayudado sin duda por los tambores de guerra que sonaban en la frontera francesa y la actitud de los diputados aragoneses, tuvo la virtud de aplacar las iras reales y convencer al monarca de que, lejos de la *unión*, la única forma posible de acabar con el problema era una persecución militar constante, para lo cual hacía falta dinero⁽¹²⁹⁾. Acabada la bolsa del virrey, solo quedaba pedirlo a la *generalitat*, las ciudades, o convocar Cortes. A comienzos de su mandato ya había sugerido que se escribiese a Barcelona y las principales villas a fin de que entre todas prestasen 6.000 ducados para pagar las fuerzas (a devolver con el primer servicio de Cortes), idea rechazada en Madrid⁽¹³⁰⁾. De modo que, descartadas las Cortes por varios motivos, la diputación parecía la única opción disponible, pero la negociación con sus integrantes fue larga y frustrante para ambas partes, un diálogo de sordos donde cada uno defendía su postura desde una concepción del servicio real absolutamente antagónica⁽¹³¹⁾.

3.3. Las negociaciones con la *generalitat*

Ya en febrero de 1572 don Hernando manifestaba su intención de acudir a la *generalitat*, para obtener dinero con que pagar a las tropas que habían de perseguir a los bandidos⁽¹³²⁾. El rey estuvo de acuerdo, e incluso envió una carta para los diputados en general y otra para Alentorn en particular, a fin de mejorar su disposición⁽¹³³⁾. A pesar de ello, se negaron en redondo a gastar una sola libra del general en lo que entendían era una función exclusivamente del rey. Pero, el hecho de que los diputados de Aragón decidieran emprender al mismo tiempo los movimientos que hemos revisado en el epígrafe anterior, dieron al monarca un argumento, a su entender irrefutable, para que los catalanes siguieran el mismo camino, razonamiento que empleó en el mes de junio en nueva correspondencia con los diputados⁽¹³⁴⁾. Sin embargo, en ese momento la *generalitat* estaba muy ocupada, como informaron al prior, atendiendo las quejas de la nobleza sobre el excusado, que mereció nuevas embajadas a la Corte y a Roma⁽¹³⁵⁾.

En consecuencia, tras superar las falsas esperanzas generadas por el rumor de que los diputados habrían de dejar en manos de la audiencia (que se suponía más manejable) la legalidad de la decisión de gastar dinero en una persecución universal⁽¹³⁶⁾, don Hernando decidió esperar a los nuevos componentes de la *generalitat* que habrían de

ser elegidos en el mes de julio. A los pocos días los convocó a su presencia para exponerles la cuestión, haciendo incluso un aparte con Agullana, que entendía era el más influyente. Les entregó cartas del rey y las disposiciones que se habían tomado en el vecino reino de Aragón, obteniendo una primera impresión favorable de los noveles cargos⁽¹³⁷⁾.

Pero don Hernando tardó sólo algunas semanas en escribir que éstos andaban "...tibios en el negocio, y buscando causas y ocasiones que hayan dado los ladrones en daño del general, por forcarles a tomar la mano en su persecución"⁽¹³⁸⁾. Así quedaban definidas las dos posturas: por un lado la diputación, que tenía muy claro que la ley le permitía únicamente perseguir a aquellos ladrones que hubiesen dañado los intereses de la *generalitat*; por otro, Felipe II y su virrey, para quienes resultaba incomprensible que, teniendo dinero, no se decidieran a una persecución general, por el bien público del principado y condados. El monarca todavía mostró deseos de acudir a las ciudades, caso de que fallara el recurso a los diputados⁽¹³⁹⁾, pero al mismo tiempo decidía ejercer presión con medidas adicionales de fuerza.

El 30 de agosto de 1572, en cartas diferentes, ordenaba al virrey, por un lado, que reclamara a la *generalitat* el pago de unas 15.000 libras pendientes de las Cortes, dinero que podría servir para la persecución⁽¹⁴⁰⁾; por otro, exigía así mismo que los abogados fiscales de la audiencia procedieran contra los diputados del trienio pasado, cuyos excesos eran, en su opinión notorios -y que no sucediera como en 1569, cuando la investigación abierta contra los anteriores se había detenido por otros respetos- y adjuntaba una lista de puntos sobre su actividad, presuntamente punibles⁽¹⁴¹⁾; y todo ello además de la visita a la que, legalmente, eran sometidos por sus sucesores en el cargo⁽¹⁴²⁾.

Estaba clara la regia intención de influir desde la Corte sobre los diputados, pero en Barcelona ambas partes diseñaron y pusieron en práctica sus estrategias⁽¹⁴³⁾. Mientras el prior pidió al monarca que ordenase a la diputación la convocatoria de una junta de teólogos, letrados y sabios para determinar la justicia de la persecución universal -orden que fue prontamente enviada, sin mucho éxito⁽¹⁴⁴⁾-, en la misma decidieron despachar por el territorio a dos letrados con una pareja de alguaciles reales, con el fin de averiguar los daños ocasionados al general y los culpables, a pesar de que el prior les facilitó toda la información disponible en la audiencia.

El sombrío panorama que presentó la encuesta sobre el terreno, combinado con las presiones reales, convencieron a la diputación sobre la urgencia de las medidas a tomar, como el mismo don Hernando no pudo dejar de reconocer. Pero tenía que ser a su modo y, a fin de acercar posturas con el virrey, le propusieron la reunión de dos representantes suyos con el diputado Agullana y el oidor Valgomera. Se juntaron con Sorts y Franqueza en tres ocasiones, pero fue imposible llegar a un acuerdo. A principios de noviembre el prior decidió romper las negociaciones, considerando que la *generalitat* quedaba en evidencia ante el rey, al afirmar que podía gastar dinero, pero no en una persecución universal. Y al mismo tiempo se despachaba a gusto sobre las verdaderas motivaciones que subyacían detrás de la negativa (atribuía a determinados caballeros, que se valían de los malhechores, la presión sobre los diputados) y proponía al rey que les escribiera una dura carta a este propósito⁽¹⁴⁵⁾.

A esas alturas, Felipe II estaba realmente enojado con el negocio, y no lo disimuló en la carta que los diputados recibieron de manos del prior -que tampoco escatimó comentarios- el ocho de diciembre⁽¹⁴⁶⁾. Pero, en realidad, la respuesta de la *generalitat* al problema del bandidaje estaba estudiándose desde el mes de septiembre, y se materializó el 11 de marzo de 1573, con la promulgación de una *Cride*⁽¹⁴⁷⁾. Era ésta una proclama (o pregón) de la diputación mediante la cual se ponía precio a las cabezas de los bandidos que habían atentado contra los intereses del general; y, al mismo tiempo, se escogía a 4 oficiales reales de confianza, con un sueldo de 250 libras, para hacer gente y perseguir a los delates, bajo ciertas condiciones. Informaron al rey de estas disposiciones, y unas semanas después le describían los grandes logros conseguidos en tan poco tiempo: el primero fue la rota de una cuadrilla en Igualada, a finales de marzo, pero cada día se apresaban o mataban ladrones por todo el territorio, con la colaboración de nobles -en especial el Duque de Cardona- y ciudadanos⁽¹⁴⁸⁾.

La *generalitat* estaba orgullosa del fruto de sus esfuerzos, pero no encontraron en la Corte el agradecimiento que esperaban. Consternados, descubrieron que, tras superar la fase inicial de reconocimiento a los diputados⁽¹⁴⁹⁾, el virrey había informado desfavorablemente sobre la fórmula empleada y, al parecer, había sido creído por Felipe II⁽¹⁵⁰⁾: siempre según el prior, los cuatro comisarios nombrados por el general no solo se habían negado a reconocer como superior a Ramón Torrelles (con título militar expedido por el rey), sino que habían discutido por el mando y, por si fuera poco, se habían quedado con parte del dinero entregado para pagar a su gente (que a su vez se habían peleado entre ellos, con el resultado de tres muertos); además, la hazaña de Igualada había que atribuirla únicamente a los habitantes de aquella villa y los vasallos del Duque de Cardona (cuyo procurador, Jaume Pau Franqueza, que había dirigido las operaciones, era hermano del abogado fiscal, muy próximo al prior). Con esta excusa, la diputación quería disolver la gente, y el prior opinaba que éste había sido su objetivo encubierto desde el primer momento, así como ampliar ilegalmente su jurisdicción en temas criminales.

El once de agosto de 1573, don Hernando convocó a los diputados a su presencia para entregarles una carta del rey, acompañada de un severo rapapolvo sobre sus movimientos e intenciones, que los catalanes sintieron enormemente⁽¹⁵¹⁾. De modo que cuando, al día siguiente, recibieron una suplicación del procurador de Marc Antoni Forner⁽¹⁵²⁾, un caballero apresado por don Hernando, el ambiente estaba preparado para el estallido de una nueva crisis entre las autoridades catalanas y el virrey y la Corte.

3.4. El caso de Marc Antoni Forner

Forner era un caballero clérigo, señor de un pequeño castillo cerca de Salses, en la frontera con Francia. A partir de aquí, las versiones diferían completamente⁽¹⁵³⁾: mientras para el virrey se trataba de un notorio bandido, cuyas fechorías se contaban por decenas, tratos con herejes y franceses incluidos, y a quien intentó dar caza desde el comienzo mismo de su mandato como capitán general -cosa que logró a principios de agosto, aplicándole el garrote en Salses el día doce-, para la diputación se trataba de un pacífico caballero, víctima de una arbitrariedad inconcebible del prior, usando de la

jurisdicción militar; y el obispo de Elna, en cuya diócesis se habían desarrollado los hechos, lo consideraba una injerencia intolerable en la jurisdicción eclesiástica, que entraba de lleno en los supuestos contemplados en la bula *in coena domini*⁽¹⁵⁴⁾. Los hechos se sucedieron con gran rapidez, y acabaron implicando a todas las instancias de poder del principado.

La diputación juntó los brazos de inmediato y, tras arduas deliberaciones⁽¹⁵⁵⁾, el trece de agosto decidieron enviar conjuntamente con el consejo de Barcelona, una embajada al virrey, cuyo único efecto fue que don Hernando advirtiera al monarca de la existencia del problema, así como de una probable embajada a la Corte de los diputados⁽¹⁵⁶⁾. Sin embargo, alarmado por el enorme revuelo suscitado y el cariz que tomaba el asunto, puso en práctica dos medidas preventivas: escribió a la Corte, para obtener del nuncio la absolución en caso de que el carácter de clérigo de Forner le hubiera hecho incurrir en alguna censura (concedida el 22 de agosto, *ad cautelam*); y, por otro lado, organizó una junta de teólogos y juristas para que dictaminaran si había ido contra la ley de Dios y las constituciones, obteniendo un dictamen favorable.

Como esperaba el prior, los diputados despacharon con presteza una misión a la Corte, encabezada por Antón Rocabert. Y no tardó en entrar en liza la jurisdicción eclesiástica, pues trataron también de influir en el obispo de Girona, que era el comisario del Breve apostólico contra clérigos que hubiesen cometido delitos⁽¹⁵⁷⁾, aunque éste, en Barcelona, procedió con cautela, y se hizo aconsejar por los doctores de la audiencia. Pero el obispo de Elna fue mucho más allá, y a primero de septiembre de 1573 publicaba la excomunión del prior y los oficiales que habían tomado parte en el ajusticiamiento de Forner, cuyo efecto más inmediato debía ser impedir el ejercicio de la justicia al lugarteniente general. Además, intentó implicar a la diócesis de Barcelona, aunque oportunas conversaciones con sus responsables lo impidieron, además de predicar en sus iglesias el salmo de la maldición contra los inculpadados.

Ante la gravedad de la noticia, el prior deliberó con Sorts y Franqueza, doctores del criminal de su confianza. Después reunió los consejos civil y criminal, que apoyaron con 5 motivos la actuación del virrey, y la apelación ante el obispo de Elna de los procedimientos seguidos contra su persona. Don Hernando echó mano así mismo de su condición de prior de la religión de San Juan de Jerusalén (como tal tenía el privilegio de que "ningún religioso professo pudiese ser descomulgado por ningún ordinario") y de la Inquisición, uno de cuyos miembros se reunió con varios doctores de la audiencia, dictaminando la justicia de la causa del prior⁽¹⁵⁸⁾.

En la Corte, recién enterrado Ruy Gómez, eran el prior don Antonio, el Conde de Chinchón y el doctor Velasco quienes estudiaban la cuestión por orden del rey⁽¹⁵⁹⁾. Esta "junta de los tres" contempló con preocupación el nacimiento de un nuevo foco de tensión en el principado, no solo por el problema jurisdiccional suscitado (que podía llegar a afectar el buen gobierno y la justicia de Catalunya), sino porque la diócesis de Elna era territorio fronterizo, en un momento muy delicado debido a las correrías de los herejes y las repercusiones del fracaso, que comenzaba a ser evidente, de la política militar del Duque de Alba en Flandes. Así que se requirió toda la información disponible sobre el caso (tanto sobre los delitos de Forner como las posibles intenciones ocultas de los diputados), y a continuación se pusieron en marcha los mecanismos disponi-

bles, mediante nutrida correspondencia con el Papa, don Juan de Zúñiga, el virrey y los diferentes obispos, en especial el de Girona⁽¹⁶⁰⁾.

Desde un principio, la estrategia elaborada en la Corte estuvo muy clara, y giraba sobre dos ejes⁽¹⁶¹⁾. El primero era procurar sensación de normalidad, pues no se trataba de un asunto extraordinario; antes al contrario, el conflicto de jurisdicción entre los tribunales reales y eclesiásticos estaba perfectamente regulado mediante la concordia entre la reina Elionor y el cardenal Bertran de Comenge (1372)⁽¹⁶²⁾, y desde entonces se había suscitado en multitud de ocasiones. El segundo, era sacar al obispo de Elna del caso, pues se entendía que, por alguna razón, estaba fuera de sí. Para ello, según los instrumentos legales citados, había dos caminos, basados en procesos de contención de jurisdicción contra el díscolo prelado: bien por parte del obispo de Girona (en calidad de comisario apostólico del breve, a quien en consecuencia debía corresponder la jurisdicción del caso), bien por la audiencia, cuyo abogado fiscal debía presentar en el consejo criminal proceso de contención contra la real jurisdicción, (instando al prelado a que revocase sus actos), dado que, al coger las armas, y siempre según la concordia, Forner había pasado a la jurisdicción regia que, en consecuencia, se había visto invadida por el obispo. Además, y por todo ello, el monarca añadía que la audiencia debía estudiar las posibilidades de incoar un proceso de regalía *Laudamentum curiae* (culpables de impedir la actuación de los oficiales reales) contra el obispo de Elna, "...que sea escarmiento para él y todos los demás eclesiásticos, para que no intenten semejantes dificultades y novedades...".

Pero Felipe II tropezó con dificultades. Para empezar, entre la propia administración real, porque, para disgusto suyo, los doctores de la audiencia se mostraron divididos sobre la posibilidad de mover contención de jurisdicción contra el obispo de Elna, opinando unos que era preferible la apelación ante el nuncio, o bien a Roma; dado que ello supondría reconocer la jurisdicción eclesiástica ordinaria en el caso, el monarca no estaba dispuesto a aceptar la fórmula⁽¹⁶³⁾. El voto del prior tuvo que ser decisivo para que se emprendiera la contención en la audiencia⁽¹⁶⁴⁾, así que no debe extrañar la carta de censura que el monarca envió a los doctores del civil en general ("...en esto an ydo floxos y no hecho lo que podían y devían conforme a lo que es permitido y acostumbrado"⁽¹⁶⁵⁾), y al regente, Bernabé Serra, en particular ("...por la razón que ay de estar de él más sentido, por el cargo que de nos tiene"), reprimenda completada días después, con ocasión de la conclusión de la *visita* llevada a cabo por el obispo de Barcelona⁽¹⁶⁶⁾.

Además, el Rey Católico tuvo que suavizar el tono inicial empleado en sus cartas al obispo de Elna, porque, en palabras del propio monarca, "...en la coyuntura presente que ay entre su Santidad y nuestros ministros de Italia sobre esta materia de jurisdicción, tantas novedades pudieran dañar..."⁽¹⁶⁷⁾. En efecto, el caso había llegado a Roma por cuatro vías diferentes. Mientras el rey escribía al embajador Juan de Zúñiga, don Hernando hacía lo propio con el cardenal Pacheco, miembro del linaje Toledo, para asegurarse la buena disposición del Papa; por su parte, los diputados comisionaban a sus agentes en la Santa Sede para obtener el efecto contrario, y, finalmente, el obispo de Elna informaba a Gregorio XIII de los pasos que había dado⁽¹⁶⁸⁾.

Tras ciertas maniobras en la Ciudad Eterna, el asunto concluyó con el despacho a finales de 1573 de los breves papales solicitados para la absolución del prior y sus ofi-

ciales (con un rápido forcejeo sobre la autoridad eclesiástica que debía dictarlos, pues el Papa pretendía que fuera el mismo obispo de Elna, y en la Corte que lo hiciera el obispo de Barcelona, como así sucedió). Para cerrar el negocio, al tiempo que se recibían los breves Felipe II ordenaba al consejo criminal que procediera contra todos los que habían intervenido perturbando la regia jurisdicción, en especial Pere Bayle, asesor del gobernador de los condados, quien había sido enviado a Perpinyà y no había hecho los oficios necesarios⁽¹⁶⁹⁾; así mismo, en mayo de 1574 despedía de la Corte a los embajadores que la generalitat y la ciudad de Barcelona habían despachado para protestar por el caso (Rocabert y Lluys de Ursay⁽¹⁷⁰⁾). Claro que la diputación siguió teniendo el suceso muy presente, y años después, en un informe elaborado por el Conde de Chinchón para repasar la situación de la Corona de Aragón ante la celebración de unas posibles Cortes, se advertía de la precaución necesaria con que había que tratar el tema⁽¹⁷¹⁾.

4.- CONCLUSION

El 20 de marzo de 1574, atendiendo a sus reiteradas solicitudes de presentarse en la Corte para informar de ciertos negocios, Felipe II concedía 20 días de licencia a don Hernando⁽¹⁷²⁾. Partió de la ciudad condal un mes más tarde⁽¹⁷³⁾ y, una vez en Madrid, presentó en los Consejos de Aragón y Guerra sendos informes sobre el estado del gobierno, la justicia y las defensas de aquellos territorios⁽¹⁷⁴⁾. A su entender, no era poco el trabajo realizado, y el prior estaba firmemente decidido a renunciar al cargo y solicitar nuevo destino, tras una licencia que le permitiera atender los negocios del priorato. Así se lo manifestó al rey en una audiencia, pero el monarca, "...con las palabras que él suele", le representó la necesidad que tenía de su persona en Catalunya ese verano, tanto por la inquietante situación en Francia como por los avisos de la armada turca. Indeciso, don Hernando acudió al prior don Antonio de Toledo para consultar la situación, "...y pareciole que en ninguna manera podía dejar de bolber pues se contentava que no fuese my stada más que por este verano, y que no era bien dejarle descontento al cabo de tantos años de servicio, porque si lo dejara de hazer que era perder con él cuanto en todo ese tiempo se avía ganado. Y así me e resuelto de no dejarle descontento..."⁽¹⁷⁵⁾. Regresó pues a Barcelona con nuevos títulos para ejercer sus oficios, que esta vez tenían carácter indefinido en la suposición de que habría de ser solo por unos meses, pero todavía le aguardaba un lustro en Catalunya.

Es evidente que el estudio del primer mandato de don Hernando en Catalunya, limitado además a una materia concreta, resulta escaso margen para sacar conclusiones sobre la figura del virrey como difusor del poder real y, en general, las características del gobierno del principado en tiempos de Felipe II, campo de reflexión, por otro lado, que ha tenido buenos maestros. Con todo, pensamos que de las páginas precedentes se pueden extraer algunas ideas, que contribuyan a mejorar la comprensión de ciertos perfiles de este complejo proceso.

En primer lugar, parece clara, y así creemos haberlo demostrado, la posición del virrey como irradiador principal de la gracia regia en el principado, y, además, que este era un recurso imprescindible para su gobierno, sea cual fuere el estatuto jurídico que presentaran ante la persona real los actores de la vida política catalana. La investigación nos ha proporcionado ejemplos suficientes. Con los componentes de la regia administración, independientemente de su nivel (doctores de la audiencia, altos oficiales de la administración hacendística, *veguers*), el virrey siempre tenía la posibilidad de emitir órdenes directas, y cuando encontraba resistencia para su cumplimiento, una oportuna y seca misiva real aclaraba los malentendidos, aunque no siempre lograba resultados. Por lo que respecta a los representantes de la comunidad y miembros de la nobleza local, en último extremo era la comunicación del monarca, a instancias del lugarteniente, la única llave disponible para mover voluntades. Así que, como hemos podido comprobar, las cartas personalizadas (por supuesto, entregadas en mano por el virrey, que aprovechaba la ocasión a su conveniencia), con abundantes promesas de recordar a su debido tiempo los servicios prestados a la Corona, fueron utilizadas con profusión durante estos años. Es cierto que, en ocasiones puntuales, el monarca decidía presionar con los recursos jurídicos que entendía estaban a su alcance, combinando así las amenazas con los halagos, pero no parece que resultara una política demasiado consistente.

Pero el esquema revestía mayor complejidad, porque si los catalanes comprendían que, con el "Rey Ausente", el virrey era la vía, digamos, oficial, para comunicarse con el soberano y (si las circunstancias eran favorables) acceder a la *gracia* regia y obtener satisfacción a sus pretensiones personales o colectivas, también eran conscientes de la existencia de caminos alternativos para alcanzar el mismo fin. No hay que minimizar las conexiones de distinto tipo que podían establecer con las facciones cortesanas los principales personajes del principado, ya se tratara de nobles o letrados, aunque este es un tema que requiere ulteriores y más profundas investigaciones. Y los representantes de la comunidad, en concreto, disponían de las posibilidades que les confería su estructura constitucional para establecer con la Corte canales paralelos e independientes de transmisión, como eran las embajadas. Claro que asumían su impopularidad, pues eran poco gratas a los ojos del monarca y sus ministros, pero era la única manera que entendían estaba abierta para hacer llegar sus puntos de vista a un soberano cuya visión del principado estaba mediatizada por la de un virrey que, por lo general, se mostraba incapaz de interpretar correctamente sus actitudes. Porque, al menos en nuestro caso de estudio, parece clara la disociación existente entre la mentalidad de un militar castellano y los distintos estamentos de poder catalanes.

De manera que, en resumen, nos encontramos con una situación en la que el virrey aparecía como nexo oficial, pero no único, entre dos mundos diferentes, con la *gracia* real como preciosa argamasa y sus propios intereses personales en juego: por un lado, necesitaba sólidos apoyos en la Corte para que su política (y, a la postre, su carrera) no se viera boicoteada por las intrigas de grupos opositores (como le sucedió al prior al menos en una ocasión, en el verano de 1572), y para ello cuidaba mucho sus contactos en Madrid, manteniéndose constantemente informado de los vaivenes políticos; además, las conexiones habrían de permitirle establecer y alimentar provechosas relaciones con los personajes más relevantes del principado, que le facilitarían el ejercicio del gobierno.

El fracaso de esta ecuación, esto es, la incapacidad del virrey para establecer sólidas relaciones clientelares en los distintos escenarios que tenía que atender, dio como resultado que el grado de éxito de Felipe II para imponer a las distintas autoridades catalanas determinadas formas de actuación, en nuestro caso ante el problema del bandidaje, fuera, como mucho, discreto. Las razones de este fracaso son complejas y variadas. Por supuesto, es preciso tener en cuenta la inexistencia de una auténtica corte virreinal, integradora de las elites locales, circunstancia derivada, entre otros factores, del precario estado del patrimonio regio en el principado (que limitaba mucho las posibilidades de reparto de prebendas), y, en consecuencia, la calidad de las sinecuras ofrecidas (hemos visto como los nombramientos militares resultaron pobre señuelo para atraerse a los caballeros). Pero cabe destacar que, por encima de los posibles beneficios que los catalanes estuvieran dispuestos a obtener a cambio de atender el servicio real, el problema era la tensión constante entre dos formas diferentes de entender este servicio, en último extremo, la misma concepción del poder real, cuya mejor expresión es, probablemente, el conflicto de las jurisdicciones.

En efecto, si hay un aspecto que resaltar de Felipe II durante este período, es su deseo casi obsesivo de preservar su jurisdicción. Ya fuera con la forma de combatir los bandidos, o a la hora de enfrentarse a los conflictos eclesiásticos, la preocupación principal del monarca era que el problema y su resolución no afectasen un ápice a sus derechos, detentados en su nombre por el lugarteniente general. La declaración efectuada el 19 de diciembre de 1573, en carta a don Hernando y a la audiencia, es suficientemente expresiva en este sentido: "Nos, como rey y señor, tenemos la intención fundada en que toda la jurisdiction civil y criminal, alta y baxa, mero y mixto imperio y qualquier otra jurisdiction y superioridad universal y preheminente, está en nuestra persona y de nuestro lugarteniente general, si no es en quanto especialmente y expresamente nos, o nuestros predecesores, la avemos concedido y abdicada de nos..."¹⁷⁶; y, por supuesto, en su ausencia esta preeminencia era ostentada por su representante, y así, cuando el prior usó de su condición de la orden de San Juan para intentar eludir la excomunión del obispo de Elna, el soberano le advirtió sobre el remedio, "...pues no conviene que se entienda que ha de aver ningún título más preeminente ni respetado que el que representais, de nuestro lugarteniente general"¹⁷⁷.

Es evidente que este concepto de la preeminencia del poder real hay que situarlo en su contexto. Inmersa en el proceso de confesionalización, la Monarquía reelaboraba sus fundamentos teóricos y reorganizaba sus estructuras de gobierno, proceso que había traído consigo fuertes tensiones con el Papado; y, también, pero este es un tema peor estudiado, al menos en el siglo XVI, con los mismos componentes periféricos de la Monarquía. Porque, en el caso de Catalunya, esta conceptualización chocaba frontalmente contra la teoría del pactismo, mediante la cual la soberanía era compartida entre el monarca y las Cortes. Ciertamente, como ya se ha señalado, los límites de la teoría eran difusos y variables, según las circunstancias, pero los primeros años setenta parecen claramente tiempos de escaso entendimiento, y en este terreno resbaladizo Felipe II parecía muy poco dispuesto a emplear determinados aspectos de sus regalías para crear lazos clientelares entre las elites catalanas.

Esta tensión constante tuvo incluso sus repercusiones sobre las estructuras regias de

gobierno, administradoras de la "iurisdicção" del monarca. Así, en la Corte, el antecesor de don Hernando en el virreinato, el Duque de Francavilla, muy cercano al partido castellanista", acusaba al Consejo de Aragón de "floxedad" y "mucho amor" a los de su patria, motivos por los que se iban perdiendo las regalías en los territorios de aquella Corona⁽¹⁷⁸⁾. Dada la escasa influencia del Duque por aquellas fechas, es probable que sus acusaciones no tuvieran consecuencias, pero la situación era diferente en el principado, donde la audiencia estaba en el centro de la controversia. El carácter de esta institución ha sido y es objeto de cierto debate; por nuestra parte, hemos comprobado como, durante los tres años estudiados, el Rey Prudente se mostró francamente descontento con su actuación, al considerar que no protegía adecuadamente sus intereses. Don Hernando, en apariencia, defendió siempre a los doctores, pero cuando fue consultado en 1581 sobre los mejores candidatos para cubrir la vacante de regente la cancellería, significativamente no dudó en recomendar que se buscara a alguien completamente ajeno a la audiencia, que se viera libre de sus parcialidades⁽¹⁷⁹⁾. En realidad, parece que sólo mostró gran confianza con dos o tres de sus integrantes, explicitando sus reservas sobre el resto. Y este distanciamiento tuvo sus efectos, pues llegó incluso a afectar la forma tradicional de elección de los componentes de este organismo. Consistía esta en la reunión de los doctores para proponer a la Corte una terna de candidatos, "...después de haver oydo una misa del Espíritu Santo y jurado en manos del virrey y recevydo sobre sí sentencia de escomunión..."; con todo, si nos atenemos al airado testimonio de Bernardo de Bolea, parece que el mecanismo fue modificado durante estos años, dejando la elección de aspirantes en manos del virrey debido muy posiblemente a las fricciones del monarca con la audiencia⁽¹⁸⁰⁾.

Ahora bien ¿se puede deducir de este proceso de formación de la Monarquía Hispánica, un deseo uniformizador de Felipe II? A nuestro juicio, la respuesta debe ser negativa, pero con matices, porque la dirección de un conglomerado tan complejo tuvo sus consecuencias. Por un lado, al Rey Católico y a sus ministros les resultaba ya demasiado tentador comparar la respuesta de estados diferentes ante el mismo problema, en nuestro caso el bandidaje; hemos visto como la diputación de Aragón se hallaba dispuesta a emplear hombres y dinero en una persecución universal, actitud que en la Corte se utilizó con profusión en sus discusiones con las autoridades catalanas, a fin de echarles en cara su falta de colaboración. Por otro, es indudable que la necesidad de racionalizar el gobierno, así como los compromisos derivados de la política en el conjunto de la Cristiandad, sacrificaron en cierta medida los intereses individuales de sus diferentes componentes, como era el caso de Catalunya. Así cabe interpretar el nombramiento de un militar castellano, curtido en los campos de batalla europeos, como virrey del principado, en un momento especialmente comprometido debido a las amenazas francesas y mediterráneas. Cuestión que, por otro lado, engarza con las discusiones sobre la formación de una élite de la nobleza, preferentemente castellana, para la dirección de los ejércitos y estados de la Monarquía; preocupación ésta última de Felipe II que no resulta difícil probar documentalmente (la denominada "...falta de cabeças"), aunque, a nuestro juicio, sea mucho más problemático hablar de un plan premeditado de "castellanización".

No obstante, las exigencias organizativas planteadas a la Monarquía fueron emple-

adas en un determinado momento por uno de los grupos políticos que bregaban por el poder. El "partido castellanista", encabezado por el secretario Mateo Vázquez, defendía en la Corte hispana una visión sobre la articulación de la Monarquía basada fundamentalmente en la óptica castellana. Ello comenzó a gestarse tras la muerte de Espinosa y, como ya indicamos más arriba, el prior se convertiría en un asiduo del poderoso secretario. Y por lo que se refiere a la Corona de Aragón, los personajes más sobresalientes de esta facción fueron el II y, sobre todo, el III Conde de Chinchón, Tesoreros Generales y ambos muy ligados a Mateo Vázquez, que se distinguieron tanto por la defensa a ultranza de las posiciones regias sobre el territorio, como por la realización de propuestas sobre su gobierno en la línea "castellanista". En este sentido hay que encuadrar el infructuoso intento de don Diego de crear la presidencia del Consejo de Aragón, figura netamente castellana y que debía recaer en un extranjero de aquellos reinos, superponiéndose al cargo de vicecanciller; no hay que decir que para ocupar el oficio, como resaltaba el mismo conde, "...me hallo con mas partes que otros"⁽¹⁸⁾.

De manera que, si bien durante este período se llevaron a cabo determinadas reformas en los organismos de gobierno centrales y periféricos, probablemente no alcanzaron la medida deseada por los dirigentes del "partido castellanista", incapaces de superar la sensibilidad del propio monarca a las particularidades de los diversos estados que componían su monarquía. Porque, en el caso de Catalunya, debemos resaltar que, aunque es innegable la disposición de Felipe II a defender en todo momento con energía las prerrogativas regias, lo hizo por lo general dentro de los cauces disponibles en la estructura legal del Principado.

ABREVIATURAS

AA.	: Archivo de los Duques de Alba (Madrid)
ACA.	: Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona)
G.	: Generalitat
AGS.	: Archivo General de Simancas (Valladolid)
E.	: Estado
GM.	: Guerra y Marina
AHN.	: Archivo Histórico Nacional (Madrid)
CS.	: Consejos Suprimidos
I.	: Inquisición
AZ.	: Archivo Zabálburu (Madrid)
BNM.	: Biblioteca Nacional (Madrid)
DGC	: Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. II, 1539-1578
EDA	: Epistolario del Tercer Duque de Alba
IVDJ.	: Instituto Valencia de Don Juan (Madrid)
RAH.	: Real Academia de la Historia (Madrid)

NOTAS

- ⁽¹⁾ Una visión general de la carrera de don Hernando, y de las circunstancias en que se produjo su acceso al virreinato, en nuestro trabajo "Don Hernando de Toledo: capitán del rey y de sus consejos de Estado y Guerra", presentado a *Il perfetto Capitano: immagini e significati del "capitano" fra Cinque e Seicento*, dir M. FANTONI (en curso de publicación).
- ⁽²⁾ El título de Lugarteniente General en AA, caja 156, n° 9; la patente de Capitán General en *Ibid*, n° 7, y las instrucciones para ambos puestos en *Ibid*, caja 53, n° 88 (copia de estas últimas en AHN. CS, lib. 2293, fols. 85v-99r). Con la misma fecha se expedían cartas notificando el nombramiento a los obispos, audiencia, gobernador, diputados y ciudades de Barcelona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Balaguer, Girona, Vic y Perpinyà (copia en *Ibid*. fols. 80v-84v).
- ⁽³⁾ Estos movimientos son relatados en carta del prior al rey de 2 de junio (AZ. Carpeta 175, n° 152; contestada por el monarca el día 11, copia en AHN. CS, lib. 2293, fol. 116), y encontramos así mismo una detallada descripción en DGC, pp. 333-334. El juramento se realizaba en la primera ciudad importante que el nuevo virrey encontraba en su camino, a fin de ejercer cuanto antes su jurisdicción, y se repetía en Barcelona debido a la ya tradicional reclamación de sus dirigentes (J. LALINDE ABADIA, *La institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona 1964, p. 211).
- ⁽⁴⁾ Recibió títulos el 12 de abril de 1571 (trienal), 18 de mayo de 1574 (indefinido), 15 de mayo de 1576 (trienal) y 20 de julio de 1578 (indefinido); las referencias oportunas en J. LALINDE ABADIA, *La Institución...*, tabla de nombramientos de virreyes.
- ⁽⁵⁾ Como se puede constatar en las sucesivas revisiones bibliográficas de J. MATEU IBARS, "Nota sobre historiografía de los virreinatos de Catalunya y otros de la Corona de Aragón", *Primer Congrés d'història moderna de Catalunya*, Barcelona 1984; P. MOLAS RIBALTA, "Administración y poder territorial en la Europa Moderna", *Estudis*, n° 13 (1987), pp. 7-19, esp. 16; ID, "Institucions i grups socials a la Catalunya dels Àustries", sessió de cloenda del III Congrés d'Història moderna de Catalunya, *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. II, pp. 573-581. También advirtió acerca de la laguna de conocimientos sobre los virreyes castellanos, especulando sobre su función general al servicio de la Monarquía, R. PEREZ-BUSTAMANTE, "Virreialització i castellanització de la lloctinència del principat de Catalunya (segles XVI i XVII)", *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. I, pp. 75-95.
- ⁽⁶⁾ Así, el virreinato del inmediato antecesor de don Hernando, el Duque de Francavilla (1564-1571) ha sido estudiado por J. REGLA CAMPISTOL, *Felip II i Catalunya*, Barcelona 1956; obra reeditada en 1969, sin aparato de notas, bajo el título *Bandoleros, piratas i hugonots a la Catalunya del segle XVI*.
- ⁽⁷⁾ Los últimos años han sido especialmente fructíferos en este sentido, desde diferentes puntos de vista. En primer lugar una obra que, fuera de los cánones habituales, resulta en extremo sugerente: N. SALES, *Els segles de la decadència, segles XVI-XVIII*, vol. IV de la *Història de Catalunya*, dir. P. VILAR, Barcelona 1989. Por su parte, J. H. ELLIOTT, "A Europe of composite monarchies", *Past and Present*, 137 (1992), pp. 48-71 teoriza sobre la formación de las entidades políticas superiores en el Renacimiento, sistema de encaje del que, a juicio del prestigioso hispanista, Catalunya era un ejemplo paradigmático (ID, "Catalunya dins d'una Europa de Monarquies compostes", conferència inaugural del III Congrés d'Història Moderna de Catalunya, *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. I, pp. 11-23); sobre este concepto, véanse además los trabajos reunidos en *Las Monarquías del Antiguo Régimen, ¿monarquías compuestas?*, dir. por C. RUSSELL y J. ANDRES-GALLEGO,

Madrid 1996). Por otro lado, J. L. PALOS PEÑARROYA, *Catalunya a l'Imperi dels Àustria: la pràctica de govern (segles XVI i XVII)*, Lleida 1994, analiza con rigor la vigencia del sistema político catalán dentro del nuevo marco de la Monarquía (véase especialmente el cap. I, "Catalunya a l'Imperi"). Discurre sobre las claves de la relación de los distintos reinos de la Corona de Aragón con la Monarquía. E. BELENGUER CEBRIA, "La Monarquía Hispánica vista desde la Corona de Aragón", *Estudis*, n° 90 (1994), pp. 57-82 (pub. también en *La proyección europea de la Monarquía Hispánica*, dir. F. RUIZ MARTIN, Madrid 1996, pp. 107-132). Además, P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya i la Casa d'Àustria*, Barcelona 1996, aporta un análisis comparado con el desarrollo institucional de los territorios de la Monarquía austriaca, así como valiosos datos de los hombres y linajes que ocuparon las instituciones catalanas. Una de las últimas contribuciones es la de R. GARCIA CARCEL, *Felipe II y Cataluña*, Valladolid 1997, una acertada reflexión global sobre las estructuras de gobierno, las mentalidades y las relaciones de Felipe II con el principado en sus distintas facetas.

- ⁽⁶⁾ Una síntesis reciente, con nuevas propuestas de análisis sobre el papel que jugaron las "cortes provinciales", en el trabajo de F. J. GIL PUJOL, "Una cultura cortesana provincial. Patria, comunicación y lenguaje en la Monarquía Hispánica de los Austrias" *Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna (actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 27-30 de mayo de 1996)*, Alicante 1997, pp. 225-258.
- ⁽⁷⁾ Como se pone de manifiesto, discutiendo las muy extendidas interpretaciones de las denominadas "elites" locales, en la revisión bibliográfica de J. MARTÍNEZ MILLÁN, "Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía hispánica durante la edad moderna", *Studia Historica. Historia Moderna*, n° 15 (1996), pp. 83-106, esp. 102-105.
- ⁽⁸⁾ Ya hace 30 años J. H. ELLIOTT apuntaba como necesario el estudio de las relaciones entre la Corte y las elites catalanas, en "A provincial aristocracy: the catalan ruling class in the sixteenth and seventeenth centuries", *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, Barcelona 1967, II, pp. 121-141 (trad. en *España y su mundo, 1500-1700*, Madrid 1990, pp. 99-121). Más recientemente, J. L. PALOS PEÑARROYA, "¿El Estado contra Cataluña? Estrategias de control y limitaciones del poder real en los siglos XVI y XVII", *Manuscrits*, n° 13 (gener 1995), pp. 143-154, apunta la necesidad de replantear las relaciones entre la Corte y Cataluña sobre la premisa de las redes clientelares, y compara la fuerte ofensiva de los validos Lerma y Olivares entre las elites catalanas, con la situación relativamente difusa en este aspecto en la época de Felipe II; ID. "Autoridad real y mediación institucional en la Cataluña moderna (siglos XVI-XVII)", *Historia Social*, 24 (1996), pp. 39-56.
- ⁽⁹⁾ Acerca de esta crisis, J. REGLA CAMPISTOL, *Felipe II...*; R. GARCIA CARCEL, "El conflicto de la Inquisición y la Generalitat de Catalunya en 1568", *Homenaje al doctor Sebastià García Martínez*, Valencia 1988, pp. 263-275; ID. *Felipe II...*, pp. 241 ss. J. BADA, *Situación religiosa de Barcelona en el s. XVI*, Barcelona 1970, pp. 241 ss.
- ⁽¹⁰⁾ Véase nuestro trabajo "Don Hernando de Toledo...", para constatar como ya fuera tanteado en 1569 para ocupar el virreinato.
- ⁽¹¹⁾ Carta del Duque de Alba al prior, 23 de marzo de 1571 (Duque de ALBA, *Epistolario del Tercer Duque de Alba, don Fernando Alvarez de Toledo*, Madrid 1952, 3 vols., en adelante EDA, II, p. 548). Acerca de la carrera de Espinosa, J. MARTINEZ MILLAN, "Un curioso manuscrito: el libro de gobierno del Cardenal Diego de Espinosa (1512?-1572)", *Hispania*, LIII/1, num. 183 (1993), pp. 299-344; ID. "En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa", *La Corte de Felipe II*, J. MARTINEZ MILLAN, ed., Madrid 1994, pp. 189-228. Sobre los ebolistas, ID. "Grupos de poder en la Corte durante el reinado de Felipe II: la

facción ebolista: 1554-1573", *Instituciones y Elites de Poder en la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI*, J. MARTINEZ MILLAN, ed. Madrid 1992, pp. 137-198.

- ⁽¹⁴⁾ Sobre el gobierno de Italia en esta época, nos remitimos al trabajo fundamental de M. RIVERO RODRIGUEZ, *Felipe II y el gobierno de Italia*, (y en concreto cap. VI, punto 4, "hacia un nuevo equilibrio") en proceso de publicación, y a cuyo autor agradecemos el habernos proporcionado un ejemplar inédito.
- ⁽¹⁵⁾ Carta del duque a don Hernando de 8 de mayo de 1571 (EDA, II, pp. 592-3).
- ⁽¹⁶⁾ Buena parte de la correspondencia que el prior enviaba a Espinosa se encuentra en AA, caja 135.
- ⁽¹⁷⁾ En IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 483 se halla tanto la creencia para Anglés (fechada a 14 de noviembre) como sus instrucciones. La recomendación para Espinosa fue firmada el día 13 (AA, caja 135, n° 155). El 17 de abril, Felipe II acusaba recibo de la presencia de Anglés y de su memoria (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 177v-181r).
- ⁽¹⁸⁾ Véanse las dos cartas despachadas el 13 de septiembre (AA, caja 135, nums. 150 y 151); en la primera, el rey anotó "Esto se podrá guardar hasta que se resuelva el negocio"; sobre el deceso, DGC, p. 364.
- ⁽¹⁹⁾ Carta de 14 de septiembre (AA, caja 135, n° 152).
- ⁽²⁰⁾ Carta de 9 de octubre de 1571 donde, tras advertir que no había recibido noticia de sus pretensiones anteriores, hacía un claro ejercicio cortesano, manifestando su alegría por la reciente provisión de los cargos de Italia y el hecho de no verse incluido en los mismos (AA, caja 135, n° 154).
- ⁽²¹⁾ Carta de 13 de enero de 1572 (AA, caja 135, n° 159).
- ⁽²²⁾ AA, caja 135, n° 161.
- ⁽²³⁾ AA, caja 52, n° 255.
- ⁽²⁴⁾ Cartas de 27 de julio y 12 de agosto de 1573 (AA, caja 151, nums. 106 y 107; pub. por Duquesa de BERWICK Y DE ALBA, *Documentos escogidos del archivo de la Casa de Alba*, Madrid 1891, p. 457).
- ⁽²⁵⁾ Entraron el II Conde de Chinchón, el Marqués de Aguilar, el presidente de Castilla Diego de Covarrubias, el Inquisidor General Gaspar de Quiroga y un letrado seglar, Andrés Ponce de León, quienes se unieron a los dos únicos consejeros que quedaban en activo, el prior don Antonio y el Duque de Francavilla (tanto don Juan de Austria, como los Duques de Alba, Sessa y Medinaceli, Requesens y Luis Dávila permanecían fuera de la Corte). Estos consejeros (excepto Covarrubias y Quiroga) entraban así mismo en Consejo de Guerra, que contaba ya con tres consejeros no ligados al Consejo de Estado, como eran Francisco de Ibarra, Francés de Alava y Juan de Ayala. Para el devenir de estos organismos en los años que nos ocupan, nos remitimos a nuestro trabajo, *Los Consejos de Estado y Guerra de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe II (1548-1598)*, Valladolid 1998.
- ⁽²⁶⁾ Al menos desde finales de 1572 tenemos constancia de la mediación del conde en los asuntos aragoneses, desde su privilegiado puesto a la vera del rey (véase G. de ANDRES, "Diurnal de Antonio Gracián, secretario de Felipe II", *Documentos para la historia del Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial*, vol. V (1962), pp. 6-127, y vol. VII (1965), pp. 7-63, pássim; además, IVDJ. Envío 13, caja 24, nums. 110 y 111; y caja 25, nums. 316 y 373 a 376); véase así mismo nuestro trabajo "La nobleza cortesana: don Diego de Cabrera y Bobadilla, III conde de Chinchón", *La Corte de Felipe II*, dir. J. MARTINEZ MILLAN, Madrid 1994, pp. 229-270. Sobre el Consejo de Aragón, J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo de la Coro-*

na de Aragón (1494-1707), Zaragoza 1994; la documentación que publica C. RIBA GARCIA, *El Consejo supremo de Aragón en el reinado de Felipe II: estudio y transcripción de los documentos originales e inéditos de este Consejo existentes en el Museo Británico*, Valencia 1914, es posterior a la época que nos ocupa. Aneja al Consejo estaba la cancellería, encargada del aparato burocrático; dirigida por el protonotario (Miguel Clemente), contaba además con un abogado fiscal (Miguel Terça) y un equipo de secretarios, uno por cada territorio de aquella Corona: desde 1566, el secretario de los negocios de Catalunya era Jeroni Gassol (sobre este personaje, E. SERRA I PUIG, "Els Gassols. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d'Aragó", *Pedralbes. Revista d'història moderna*. 1 (1987), pp. 43-77).

- ⁽²⁷⁾ García de Velasco al rey, 1 de mayo de 1572 (AGS. GM, leg. 75, n° 158).
- ⁽²⁸⁾ Sobre Antonio Pérez, G. MARAÑÓN, *Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época)*, Madrid 1947, 2 vols. y sobre Vázquez, A. W. LOVETT, *Philip II and Mateo Vázquez de Leca: the government of Spain, 1572-1592*, Geneve 1977.
- ⁽²⁹⁾ Sobre este aspecto, véase nuestra obra, *Los Consejos de Estado y Guerra...*, pp. 123-127.
- ⁽³⁰⁾ Sobre sus tentativas de acercarse a Antonio Pérez, y la amistad final con Mateo Vázquez, nos remitimos a nuestro trabajo "El prior don Hernando...".
- ⁽³¹⁾ La referencia inexcusable en esta materia sigue siendo el profundo estudio de J. LALINDE ABADIA, *La institución...*, pero se debe consultar también una síntesis anterior, J. REGLA CAMPISTOL, *Els virreis de Catalunya*, Barcelona 1956.
- ⁽³²⁾ AA, caja 53, n° 7, relación de 13 de mayo de 1574. Sobre la capitania general, V. FERRO, *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins a la nova planta*, Vic 1987, pp. 68 y ss.; E. ESCARTÍN SANCHEZ, "La capitania general de Catalunya i l'ordre constitucional català", *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. I, pp. 95-101. En otro trabajo, en curso de realización, nos ocupamos más extensamente de los aspectos militares del primer mandato del prior en Catalunya.
- ⁽³³⁾ Sobre este organismo, V. FERRO, op. cit. pp. 59-61 y 109-120.
- ⁽³⁴⁾ Así se recoge en un memorial anónimo, pero que por el contenido es probable que fuera elaborado por el Duque de Francavilla en las primeras semanas de 1571, regresado de Barcelona, recogiendo los puntos más importantes de su gobierno (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 477).
- ⁽³⁵⁾ La naturaleza de la relación entre el virrey y la audiencia es tratada por J. LALINDE ABADIA, *La Institución...*, pp. 387 y ss.
- ⁽³⁶⁾ Ibid. pp. 401-402. Una recomendación del prior para el Consejo Criminal, en la que reconocía que "...sus trabajos son mayores y los salarios menores" que en el Consejo Civil, en IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 475.
- ⁽³⁷⁾ Sobre este personaje, es de obligada consulta J. BADA, *Situació religiosa...*, (p. 156 para su muerte).
- ⁽³⁸⁾ Carta de 2 de junio de 1571, donde recordaba que se habían enviado las ternas para elegir a los candidatos (AZ. Carpeta 175, n° 152); insistió el 26 de julio (Ibid. n° 156) y 29 de agosto (Ibid. n° 161).
- ⁽³⁹⁾ Carta al rey de 12 de septiembre de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 162).
- ⁽⁴⁰⁾ AHN. CS, lib. 2293, fols. 132v-136r.
- ⁽⁴¹⁾ Lo que no impidió que denunciara la pretensión de Franqueza, en 1581, de convertirse en regente la cancellería, pues, para entonces, era yerno del regente Terça del Consejo de Aragón, parentesco que el prior consideraba muy perjudicial para los negocios (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 240). Sobre Franqueza, debe consultarse el documentado y sugerente artículo de

J. M. TORRAS I RIBE, "Los Franquesa: una familia de notarios y oficiales reales en la Cataluña del siglo XVI", *Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna* (vol. I de las actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna), Alicante 1997, pp. 395-407; señala el autor la estrecha vinculación de este personaje con el prior, así como de Francesc Puig y Terça, cabezas de la que denomina "facción realista".

⁽⁴²⁾ Carta al rey de 20 de septiembre de 1571 (AZ. Carpeta 175, nº 167). Encontramos así mismo recomendaciones para Sorts a principios de 1572 (IVDJ. Envío 13, caja 25, nº 475) y en octubre del mismo año (IVDJ. Envío 112, caja 159, nº 479). No fue hasta el 25 de enero de 1574, que Felipe II concedía a Sorts una pensión de 150 libras sobre la procuración real de Mallorca (copia de carta del rey en AHN. CS, lib. 2294, fol. 130).

⁽⁴³⁾ La propuesta del prior en carta de 4 de octubre de 1571, incluía a Francisco Serra y Adrián Vilana (AZ. Carpeta 175, nº 163). Pero el seleccionado fue Montaner, un anciano de más de 84 años, que hacía 35 que servía de consultor en el tribunal de la Inquisición (AHN. I, lib. 737, fol. 401r.); el 14 de abril de 1572 Montaner agradecía al rey la promoción (IVDJ. Envío 11, caja 19, nº 113; véanse además sus cartas al monarca en AZ. Carpeta 175, nums. 140 y 141). Sin embargo, el 30 del mismo mes Felipe II notificaba a don Juan de Zúñiga que debía obtener la dispensa papal para Montaner, pues era casado tres veces, además de haber intervenido en muchos procesos criminales (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 3r-4r).

⁽⁴⁴⁾ La notificación del monarca a Serra, en carta de 4 de mayo de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fol. 82r); la misiva de agradecimiento al rey del nuevo regente está fechada el mes siguiente (IVDJ. Envío 11, caja 19, nº 119).

⁽⁴⁵⁾ En junio de 1574, la primera sala del consejo civil estaba encabezada por Francesc Montaner Camps como canciller y compuesta por los doctores Miguel Ferrer, Adrian Vilana, Francesc Sala, Francesc Serra y Jeroni Pasqual (con la vacante de Pere de Lobregat, muerto el 23 de noviembre de 1573); la segunda, dirigida por el regente la cancellería Bernabé Serra, estaba formada por Antoni Ros y Joan Jofre (ambos consultores de la Inquisición, AHN. I, lib. 737, fol. 401), Federic Font (sustituto de Serra), Pere Balle, Antoni Negrell (suspendido a finales de 1573, debido los cargos encontrados en la visita, fue rehabilitado en enero de 1574) y Pere Sabater, que ejercía como abogado fiscal (para la composición, IVDJ. Envío 11, caja 19, nº 124). Respecto al consejo criminal, quedaba a su frente el regente la cancellería e integrado por Lluís Sorts, Miquel Cordelles, Miquel Quintana, Joan Pons Cescas (consultor asimismo de la Inquisición, donde era muy apreciado, AHN. I, lib. 738, fol. 114), Francesc Puig, Damià Osset, Miquel Joan Quintana y Martí Joan Franqueza, que ejercía como abogado fiscal (IVDJ. Envío 11, caja 19, nº 126).

⁽⁴⁶⁾ J. LALINDE ABADIA, *La gobernación general en la Corona de Aragón*, Zaragoza 1963.

⁽⁴⁷⁾ IVDJ. Envío 13, caja 23, nº 25, nota hológrafa de Felipe II.

⁽⁴⁸⁾ Juró como gobernador interino en sustitución de su padre el 20 de abril de 1574, el mismo día que el prior partía hacia la Corte, hecho que confería mayor importancia al relevo (DGC, p. 431). Poco más tarde, el 14 de julio, por "...intercesión y aprobación" del prior, Felipe II le nombró "...iuncto de dicho su padre en el dicho officio (de gobernador)" (copia de carta en AHN. CS, lib. 2294, fols. 148r-149v).

⁽⁴⁹⁾ En mayo de 1573, el prior escribía al rey que "Don Enrique de Cardona se ha llevado con tanta cordura y diligencia en el cargo que hace por ausencia de su padre, que el governador de Aragón le atribuye la presa de Vacamorta y sus cómplices (...) Y yo con justa causa puedo alabarle de lo que ha hecho y haze contra los ladrones y en la buena administración de justi-

cia...”, por lo que pedía merced para padre e hijo (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 482). Repetiría la recomendación para ambos en el mes de diciembre (IVDJ. Envío 10, caja 17, n° 175).

- ⁽⁵⁰⁾ El 30 de abril de 1572 el rey pedía a don Hernando una nómina de candidatos para el puesto (copia de carta en AHN. CS, lib. 2294, fols. 4v-5r), que el prior enviaba el 10 de junio, con cinco nombres (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 201); Puig fue elegido tras la renuncia del primer seleccionado, Planes (carta de Felipe II al prior, 31 de agosto, AHN. CS, lib. 2294, fol. 45r), y don Hernando lo sometía al examen de la audiencia (carta al rey de 7 de octubre, AZ. Carpeta 146, n° 152) que a su vez comunicaba a Felipe II la suficiencia del candidato (IVDJ. Envío 11, caja 19, n° 118).
- ⁽⁵¹⁾ Cartas al rey de 17 y 18 de agosto (desde Perpinyà), 31 de agosto (AZ. Carpeta 175, nums. 157, 158 y 161); Felipe II contestaba el 5 de septiembre, ordenando que el gobernador y su familia fueran a residir a Barcelona hasta que se resolviera el conflicto, y el prior en comandara el cargo a otra persona (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 132v-136r). Tras la noticia de la muerte de Doms, el rey aceptó el nombramiento interino de Antón Doms, pero en enero de 1572 ordenaba le enviase el virrey varios nombres para elegir sucesor (Ibíd, fols. 152v-154r).
- ⁽⁵²⁾ Véanse las cartas de Toledo al rey de 30 de diciembre de 1571 (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 481) y 30 de enero de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 130). Respecto a las pretensiones de los hijos de Doms, uno de ellos, Pedro de Cardona, elevó un memorial al rey en el que recordaba los servicios de su bisabuelo (que se dejó cortar la cabeza para no entregar los condados a los franceses), su abuelo Lluís Doms (adjuntando copia de su privilegio de gobernador, dado por Fernando el Católico) y el padre, Carles, quien lo sirvió 40 años (AZ. Carpeta 187, nums. 15 y 16).
- ⁽⁵³⁾ El 18 de mayo de 1572 Felipe II notificaba el nombramiento al barón Alonso de Eril (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 15v-16r), pero el 5 de octubre indicaba al prior que o bien el gobernador ocupaba su puesto de inmediato, o se nombraría a otro (Ibíd, fols 55v-56r). El 15 de junio de 1574, tras reiteradas solicitudes, Felipe II aceptaba la renuncia del barón, aunque debía permanecer en el oficio hasta la llegada del sustituto (Ibíd, fol. 148). Poco antes, la ciudad de Perpinyà, había elogiado su gestión (carta al rey de 28 de abril de 1574, IVDJ. Envío 10, caja 18, n° 292).
- ⁽⁵⁴⁾ Para este asunto, carta al rey de 10 de diciembre de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 165) y a Espinosa de primero de febrero de 1572 (AA, caja 135, n° 160). El 24 de marzo de 1572, Felipe II envió sus explicaciones al prior -en resumen, con ello se eliminaban las fricciones entre ambos oficiales- para que las estudiase junto a los doctores de la audiencia (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 175v-177r). En diciembre, el prior recordaría al monarca la falta de oficiales que tenía el gobernador de los condados (AZ. Carpeta 146, n° 157).
- ⁽⁵⁵⁾ V. FERRO, op. cit. pp. 89 y ss. Así mismo, T. MONTAGUT ESTRAGUES, “El Baile General de Cataluña (notas para su estudio)”, *Hacienda pública española*, n° 87 (1984), pp. 73-84; B. HERNANDEZ HERNANDEZ, “La receptoría de la Bailía General de Cataluña durante el siglo XVI”, *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. I, pp. 25-33
- ⁽⁵⁶⁾ P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya y la casa...*, pp. 57-58.
- ⁽⁵⁷⁾ Carta al rey de 20 de julio de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 149), donde proponía que se hiciera cargo de la gente asoldada de la parte de Lleida, “...si a V. Mag. no le pareciere de inconveniente lo del pleito de Almenara”. El rey no aceptó la proposición, que le hubiera impedido ejercer su oficio, que era de la importancia sabida; a cambio, sugirió que fuera el mismo gobernador el que comandara las tropas (copia de carta de 22 de agosto, AHN. CS, lib. 2294, fols. 37v-40r).

- ¹⁵⁸⁾ P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya y la casa...*, pp. 61-62. Las diferencias entre Llupià y Bayle aparecen recogidas en las recomendaciones finales de la visita realizada por el obispo de Barcelona (AHN. CS, lib. 2294, fols. 107v-108v).
- ¹⁵⁹⁾ Así se recoge en las memorias de Perot de Vilanova que publica A. SIMON TARRES, *Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinq Cent*, Barcelona 1991.
- ¹⁶⁰⁾ Carta del Conde de Aytona al rey, 1 de noviembre de 1567 (IVDJ. Envío 10, caja 17, n° 169); véase además P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya y la casa...*, pp. 62-66. Unas consideraciones generales sobre el cargo, incluyendo una relación de sus titulares, en T. de MONTAGUT I ESTRAGUÉS, "Notes sobre l'ofici del mestre racional de la Cort en el segle XVI", *Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII. Homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía*, ed. A. Iglesia Ferreirós, Barcelona 1990, pp. 265-294.
- ¹⁶¹⁾ Como señala P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya y la casa...*, p. 64 lo era al menos desde 1553, y seguía en el cargo en febrero de 1572 (IVDJ. Envío 11, caja 19, n° 112), y fue encausado en la visita a los oficiales reales de 1572 (véase nota 72).
- ¹⁶²⁾ P. MOLAS RIBALTA, *Catalunya y la casa...*, p. 67. Los movimientos de Codina en carta de Toledo al rey de 12 de septiembre de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 162).
- ¹⁶³⁾ V. FERRO, op. cit. pp. 120 y ss.
- ¹⁶⁴⁾ AZ. Carpeta 146, n° 131. En el mes de abril el prior se extendía sobre la situación particular de diversas veguerías, en las que había tenido que tomar medidas especiales (Ibíd. n° 139).
- ¹⁶⁵⁾ Carta de Toledo al rey de 7 de marzo de 1572, comentando que había pasado el negocio al regente para informarse de la idoneidad de Olicina, notario público (AZ. Carpeta 146, n° 134; la positiva relación del regente en Ibíd. n° 135).
- ¹⁶⁶⁾ T. CANET APARISI, "Procedimientos de control de los oficiales regios en la Corona de Aragón. Consideraciones sobre su tipología y evolución en la época foral moderna", *Estudis. Revista de historia moderna*, 13 (1987), pp. 131-150, con transcripción de las instrucciones para la visita de 1543. Además, V. FERRO, op. cit. pp. 406-408. Fue en 1599 cuando se regularizó la periodicidad de estos procesos.
- ¹⁶⁷⁾ El 12 de febrero se escribía anunciando la visita tanto al prior (copia en AHN. CS, lib. 2293, fol. 157v-158r), como al mismo obispo, audiencia, diputados y consellers de Barcelona (Ibíd. fols. 158 y 159). Las extensas instrucciones para la inspección que recibió el prelado en Ibíd. fols. 165v a 174r.
- ¹⁶⁸⁾ Carta del obispo de Barcelona al vicedecano Bolea de 18 de junio de 1572 (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 221); además, DGC. pp. 367-369, 377, 378.
- ¹⁶⁹⁾ Cartas de Toledo al rey de 18 de junio y 7 de octubre de 1572 (AZ. Carpeta 146, nums. 146 y 152); en la Corte le dieron la razón al virrey, como figura en la contestación del monarca de 15 de septiembre (AHN. CS, lib. 2294, fol. 52).
- ¹⁷⁰⁾ Felipe II al obispo de Barcelona, 30 de abril de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 2v-3r).
- ¹⁷¹⁾ Sobre este tema, cartas del rey al obispo de 15 de julio, 15 de septiembre y 2 de diciembre de 1572 (copias en AHN. CS, lib. 2294, fols. 29, 54r-55r, 66v-67v). En abril de 1573, dos doctores del criminal acudían a la diputación a tratar sobre los cargos contra Poll (DGC, p. 408).
- ¹⁷²⁾ Carta del obispo de Barcelona al rey de 9 de enero de 1573, con lista aneja (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 196).
- ¹⁷³⁾ AHN. CS, lib. 2294, fols. 76v-77r.; DGC. pp. 403-404.

- ⁽⁷⁴⁾ DGC, p. 425. En AHN. CS, lib. 2294, fols. 105v-110r, se encuentra la carta al virrey y diputados remitiendo la conclusión final de la visita (18 de octubre), así como la reprensión que se había de hacer a diversos ministros reales (doctores del civil, Ycart, etc.).
- ⁽⁷⁵⁾ IVDJ. Envío 112, caja 159, nº 489, carta a Mateo Vázquez.
- ⁽⁷⁶⁾ AZ. Carpeta 175, nº 175, carta de 14 de mayo de 1579.
- ⁽⁷⁷⁾ V. FERRO, op. cit. pp. 243 y ss.; PALOS PEÑARROYA, *Catalunya a l'imperi...*, cap. VIII. Sobre este organismo, está en curso de publicación una importante fuente para su conocimiento, *Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 1411-1714*, dir. J. M. SANS I TRAVE, Barcelona 1994- (aquí nos interesa el vol. II, que abarca los años 1539-1578, citado DGC).
- ⁽⁷⁸⁾ El 9 de marzo de 1572, Felipe II quiso saber cómo se hallaban los trabajos iniciados en 1564 y replanteados en 1569 (según carta al Duque de Francavilla, que reproducía íntegra) y de los cuales no sabía nada (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 162v-164r); don Hernando contestó el 15 de abril (AZ. Carpeta 146, nº 139), aduciendo que había mandado parar el negocio hasta saber del rey si deseaba su continuación. Reemprendida la tarea (por orden del monarca fechada a 18 de mayo, copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 13v-15r), el proceso fue sin embargo muy lento para Felipe II, que urgió rapidez en repetidas ocasiones: el 15 de septiembre de 1572, 16 de marzo y 4 de mayo de 1573 (copias en AHN. CS, lib. 2294, fols. 52, 76r, 79r.). El prior contestó a los requerimientos en octubre de 1572 (señalando que había ordenado se juntasen los lunes y los viernes, "...y no se alçara la mano dello hasta acabarlo", AZ. Carpeta 146, nº 152); y el 20 de mayo de 1573 (IVDJ. Envío 13, caja 25, nº 482). A primero de septiembre de 1574 era la propia diputación quien preguntaba al monarca por el negocio (Ibíd. envío 11, caja 20, nº 183). Sobre las recopilaciones, V. FERRO, op. cit. pp. 297-298, donde confirma el fracaso del intento iniciado en 1564.
- ⁽⁷⁹⁾ DGC, p. 336.
- ⁽⁸⁰⁾ Carta del prior al rey, 2 de agosto, dando cuenta de la elección con lista de nombres (AZ. Carpeta 146, nº 150).
- ⁽⁸¹⁾ En RAH, colección Salazar, ms. A-49 se encuentra diversa correspondencia del prior desde Catalunya, que nos ha sido imposible consultar debido a su estado de conservación. De todas formas, según el catálogo el contenido del fol. 208 (carta al rey de octubre de 1573) alude a la escasa confianza que le merecía la Generalitat.
- ⁽⁸²⁾ Sobre este mecanismo, V. FERRO, op. cit. pp. 279-280, y las consideraciones de J. GIL PUJOL, "Una cultura cortesana...", pp. 237 y ss.
- ⁽⁸³⁾ DGC, p. 345.
- ⁽⁸⁴⁾ Así, el 20 de mayo de 1573 pidió al rey "...que no hagan otras algunas [embajadas] sin hazérmelo saber y entender primero la voluntad de V.Mag." (IVDJ. Envío 13, caja 25, nº 482).
- ⁽⁸⁵⁾ Cartas de don Juan de Zúñiga al rey de 25 de agosto de 1569 (IVDJ. Envío 13, caja 23, nº 29), 20 de junio de 1573 (Ibíd. Envío 11, caja 19, nº 121), 21 de mayo de 1574 (Ibíd. nº 125).
- ⁽⁸⁶⁾ Por ejemplo, en diciembre de 1576, el III Conde de Chinchón escribía a Mateo Vázquez como "Todos estos días se ha tratado de buscar remedio para que se estorve a los catalanes sus embaxadas..." (IVDJ. Envío 13, caja 25, nº 377).
- ⁽⁸⁷⁾ V. FERRO, op. cit. pp. 407-408; P. LLINAS ALMADANA, P. "La visita del general: el procedimiento de control de los funcionarios dependientes de la <diputacio del general de Catalunya (1653-1701)>", *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 10 (1990), pp. 177-193. Además, se encontrarán procedimientos de visita a diversos oficiales del general durante estos años en ACA. G, visitas, 225 a 235.

- ⁽⁸⁸⁾ Carta de Toledo al rey de 13 de septiembre de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 151); el 15 de noviembre el rey aceptaba los argumentos del prior, y agradecía a los nuevos diputados el haber comenzado la visita, a pesar de las amenazas de ciertos caballeros, "...asegurándoles que haciendo en esta parte lo que deven y de ellos se ha de sperar, serán por ello de nos amparados" (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 60r-62v). Todavía en enero de 1573 se mostraba Felipe II conforme con la marcha del proceso (Ibíd, fols. 68v-70v).
- ⁽⁸⁹⁾ DGC, pp. 414 a 419.
- ⁽⁹⁰⁾ Carta de Toledo al rey de 20 de mayo de 1573 (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 482).
- ⁽⁹¹⁾ Sobre el tema, carta de Toledo al rey de 23 de julio de 1573 (AZ. Carpeta 175, n° 168), y cartas del monarca al virrey de 5 de agosto (copias en AHN. CS, lib. 2294, fols. 86v-87r); para el desarrollo de las reuniones de la visita, con los diferentes problemas alegados por los diputados, DGC, pp. 425 y ss.
- ⁽⁹²⁾ Carta de los diputados al rey, 1 de septiembre de 1574 (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 183); DGC, p. 438. En su respuesta, el 12 de octubre, el monarca distó de hallarse satisfecho, considerando que habían quedado muchos cabos sueltos (copia en AHN. CS, lib. 2294, fol. 180).
- ⁽⁹³⁾ Una vívida descripción de su posición en el conjunto del principado y el alcance de su poder, en J. H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640)*, Madrid 1982, pp. 146 y ss; además, PALOS PEÑARROYA, *Catalunya a l'imperi...*, cap. IX.
- ⁽⁹⁴⁾ Sobre el consell, J. PALOS PEÑARROYA... J. S. AMELANG, *La formación de una clase dirigente: Barcelona, 1490-1714*, Barcelona 1986, ha estudiado la dinámica interna de determinados sectores de la sociedad barcelonesa, y su integración en los círculos dirigentes.
- ⁽⁹⁵⁾ Documentación en IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 222 bis. Sobre este tema, las consideraciones iniciales de M. CALVO RODRIGUEZ, "Embajadas y embajadores de Barcelona enviados a la Corte, en la segunda mitad del siglo XVII", *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993) vol. II, pp. 535-545.
- ⁽⁹⁶⁾ Carta de Toledo al rey de 24 de julio (AZ. Carpeta 175, n° 155); todavía coleaba el asunto en octubre del año siguiente, cuando la audiencia dio la razón al gobernador, vista la calidad de su oficio (AZ. Carpeta 146, n° 153). Sobre la embajada de la ciudad, véase el epígrafe correspondiente.
- ⁽⁹⁷⁾ Para seguir este asunto, véase la correspondencia entre Felipe II y el prior entre 1571 y 1572, en AHN. CS, lib. 2293, fols. 108v-110r 116, 123 y 130; lib. 2294, fols. 63 y 91 (con la decisión final del rey); AZ. Carpeta 175, nums. 152 y 154; carpeta 146, n° 153; IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 479. Acerca de este juicio, V. FERRO, op. cit. p. 175.
- ⁽⁹⁸⁾ Carta de Felipe II al prior, el 3 de julio de 1571, informando del contenido de la embajada (copia en AHN. CS, lib. 2293, fol. 116).
- ⁽⁹⁹⁾ Este fenómeno ha tenido un amplio tratamiento bibliográfico. Destaquemos las reflexiones generales de F. BRAUDEL, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, 1ª ed. en español 1953; aquí utilizamos la ed. de Madrid 1993, II, pp. 117 y ss. Por su parte, el profesor J. REGLA CAMPISTOL ha estudiado el tema en *Felip II... y El bandolerismo català. I: la història*, Barcelona 1962 (en pp. 63-67 proporciona algunos datos de la actividad del prior en el período que nos ocupa). De los primeros años del prior se ocupa así mismo A. SIMON TARRES, "El bandolerisme català: una aproximació sociològica", *L'Avenc*, n° 82 (mayo 1985), pp. con un estudio sobre su procedencia a partir de tres crides virreinales de *separats i gitats de Pau y Treva* (aquellos que transgredían la institución fundamen-

tal de paz y tregua). Más recientemente, resulta también de sumo interés la monografía de X. TORRES SANS, *Els bandolers (segles XVI-XVII)*, Vic 1991.

- ⁽¹⁰⁰⁾ El prior llegaría a pedir a la Corte que el dinero se enviase a Barcelona por la vía de Valencia y no la de Aragón, ruta en la que menudeaban los bandidos (AGS. GM, leg 75, n° 133; una visión general de este problema en J. REGLA CAMPISTOL, *Felip II...*, pp. 114 y ss.).
- ⁽¹⁰¹⁾ Estas noticias en cartas del prior al rey de 3 de junio y 12 de julio de 1571 (AZ. Carpeta 175, num. 152 y 154). Ya antes de la entrada de don Hernando al virreinato el juez de aquella zona, Francisco Pozuelo, se quejaba del escaso respeto a la justicia de las autoridades (febrero de 1571, AHN. CS, lib. 2293, fol. 75v). Sobre el final de Brunet, véase infra, nota 112, y sobre las estructuras de gobierno del valle, P. POUJADE, *Une Vallée frontière dans le grand siècle: le val d'Aran entre deux monarchies*, Aspect 1998.
- ⁽¹⁰²⁾ Carta al cardenal Espinosa, Barcelona 2 de junio de 1571 (AA, caja 135, n° 138). J. REGLA CAMPISTOL, *El bandolerismo...*, p. 63 refiere las órdenes dadas por el prior al día siguiente al veguer de Cervera para la persecución de un destacado bandido.
- ⁽¹⁰³⁾ Carta del rey al prior, de 6 de agosto de 1571 (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 127r-129r).
- ⁽¹⁰⁴⁾ Un recorrido sobre los mismos, con algunas consideraciones, en J. BADA, *Situació religiosa...*, pp. 254-255 y 277-279; además, J. REGLA CAMPISTOL, *Felip II...*, pp. 156 y ss.
- ⁽¹⁰⁵⁾ Copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 71v-74v. Había que pulir el breve que se refería a la inmunidad en caso de refugio en Iglesias y monasterios, el que se refería al hábito y tonsura de los clérigos, de las armas que portaban, etc.
- ⁽¹⁰⁶⁾ Carta de Felipe II al prior, de 23 de enero de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 152v-154r); en *Ibid.*, fol. 154v. se encuentra la carta del rey a Zúñiga de 28 de enero y en fol. 155r. al Papa.
- ⁽¹⁰⁷⁾ Carta de Felipe II a Juan de Zúñiga, embajador en Roma, 16 de marzo de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fol. 77); el rey pedía otro similar para el resto de los reinos de la Corona de Aragón.
- ⁽¹⁰⁸⁾ No en vano bandoler era el seguidor de un *bandol* o parcialidad, de forma que frecuentemente se daba la confusión entre la guerra privada entre señores y el bandillaje (sobre este tema, X. TORRES SANS, op. cit. pp. 65 y ss.).
- ⁽¹⁰⁹⁾ Cartas al rey de 18 de diciembre de 1571 y 15 de abril de 1572 (AZ. Carpeta 146, num. 161 y 139).
- ⁽¹¹⁰⁾ Carta de don Juan de Zúñiga al rey, Roma, 21 de mayo de 1574 (IVDJ. Envío 11, caja 19, n° 125). X. TORRES SANS, op. cit. p. 72 da cuenta de un documento papal en el mismo sentido emitido en 1577.
- ⁽¹¹¹⁾ Carta al rey de 4 de octubre de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 163).
- ⁽¹¹²⁾ Carta al rey de 17 de junio de 1573 (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 478). Sobre este negocio, que arrancaba de los inicios del virreinato, véase supra nota 101.
- ⁽¹¹³⁾ Carta al rey de 29 de agosto de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 160). Acerca del sometent, véase V. FERRO, op. cit. pp. 77-79.
- ⁽¹¹⁴⁾ Sobre la *unió*, V. FERRO, op. cit. p. 81; X. TORRES SANS, op. cit. pp. 162 y ss.; así mismo, las apreciaciones de N. SALES, op. cit. p. 91, matizando la creencia generalizada sobre sus defensores (virreyes) y detractores (gente de la tierra). Respecto a su historia, en AZ, carpeta 146, n° 159 se halla un documento en catalán, que en la Corte se tituló "Relación de las diligencias que se han hecho por la Unión de Cataluña", y que es una descripción bastante minuciosa del origen y sucesivos intentos por establecer este acuerdo, hasta la llegada de

Hernando de Toledo. La pragmática es citada en el punto 24 de las instrucciones de don Hernando, y a ella se refiere así mismo J. REGLA CAMPISTOL, *Felip II...*, pp. 127-130.

- (115) Carta al rey de 18 de junio de 1572 (AZ, carpeta 146, n° 147), en la que contestaba a la misiva del monarca por la que se ordenaba la puesta en marcha de la unió, y daba cuenta de sus intentos para establecerla y el ambiente negativo que se había encontrado.
- (116) Que fueron Onofre d'Alentorn, señor de Seròs, con 100 hombres en Urgel; Pere de Cruylles, Berenguer de Paguera y Joan de Sorribes con más de 150 en Puigcerda y el señor de Anyer y Ramon Torrelles, con 100 cada uno, en los condados de Roselló y Cerdanya (cartas al rey de 29 de agosto en AZ. Carpeta 175, n° 160 y al cardenal Espinosa en la misma fecha en AA, caja 135, n° 147).
- (117) Cuyas copias encontramos en AHN. CS, lib. 2293, fol. 136.
- (118) Carta al rey de primero de febrero de 1572 (AZ, carpeta 146, n° 132). J. REGLA CAMPISTOL, *El bandolerismo...*, p. 63 refiere esta impresión triunfante del virrey, tras la actividad del estío, pero también los problemas inmediatos, a partir de la correspondencia de Toledo con las autoridades locales, en la que se mostraba bastante más pesimista que en sus despachos oficiales a la Corte. X. TORRES SANS, op. cit. p. 187 publica las cifras de bandidos sentenciados en la audiencia en 1571 (15) y 1572 (16), aunque advierte sobre el mal estado de los registros consultados y, en todo caso, no se incluye la actividad en otras jurisdicciones.
- (119) Carta al rey de primero de febrero de 1572 (AZ, carpeta 146, n° 132); el 9 de marzo Felipe II contestaba positivamente sobre el nombramiento de maestre de campo (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 160r-161r).
- (120) Para los movimientos que siguen, véanse las cartas al rey de 15 de abril y 3 de mayo de 1572 (AZ, Carpeta 146, nums. 139 y 140).
- (121) Respecto a Torrelles, el 2 de abril de 1572 el prior le recomendaba vivamente ante el rey, en su pretensión de nombrar un heredero en "... la alcaydía y baylía de Biver y sotvegueria de Barida con las escribanías del veguer y Bayle de Puigcerdá..." (AZ. Carpeta 146, n° 136).
- (122) Sobre este tema, relación de Juan Delgado al rey, con respuesta hológrafa (AGS. GM, leg. 75, n° 133) y misiva del monarca al prior de 20 de mayo de 1572 (minuta en Ibíd. leg. 77, n° 31). La misma fecha tiene el título en blanco de maestre de campo de la gente de guerra que reside en la frontera de Catalunya (AA, caja 53, fol. 87).
- (123) Negocio rechazado por el rey en carta de 28 de mayo al prior (AA, caja 9, n° 124).
- (124) Carta de Felipe II al prior de 31 de mayo de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 16v-18v); como veremos un poco más adelante (véase infra, nota 127), esta misiva fue mucho más jugosa.
- (125) Para el problema del bandidaje en Aragón, G. COLAS LATORRE, G. y J. A. SALAS AUSENS, *Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos*, Zaragoza 1982, y en concreto pp. 169 y 385 para la crítica situación en 1572 y la petición de colaboración a Catalunya y Valencia. La conexión entre Aragón y Catalunya en el tema del bandidaje es tratada también por P. SANCHEZ, "Sobre l'actuació de bandolers catalans a l'Aragó: les bandositats entre els Roche i els Calaf a Arenys de Lledó (1579-1605)" *I Congrés d'Història Moderna de Catalunya* (Barcelona 1984) I, pp. 227-233.
- (126) En carta de 8 de junio el monarca informaba a don Hernando de la decisión de las autoridades aragonesas (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 20v-21v). Además, en AZ. Carpeta 180, n° 85 se encuentra una amplia y minuciosa descripción titulada "Relación de las provisiones y prevenciones que se hizieron en Cathaluña para quando el governador con la gente de Ara-

gón quisiese perseguir los ladrones de aquel reyno", de la que se extraen las noticias siguientes. Don Hernando refirió estos movimientos al rey en carta de 20 de julio (AZ. Carpeta 146, n° 149), con una viva recomendación del batlle general.

- ⁽¹²⁷⁾ Carta de Felipe II a don Hernando de 31 de mayo de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 16v-18v); la respuesta del prior, tiene fecha de 18 de junio, donde leemos que "...yo nunca he estado tan descuydado como veo por las dichas cartas que aurán informado a V.Mag. los que no lo estarían como convenía o querrían disimular lo que en efecto pasa, para hecharme la carga deste mal" (AZ. Carpeta 146, n° 147).
- ⁽¹²⁸⁾ Carta al rey de 7 de octubre de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 152). La memoria es la citada en *supra*, nota 126. Evidentemente, habría que conocer la versión de los hechos del gobernador de Aragón.
- ⁽¹²⁹⁾ El 12 de julio, ante la vehemente defensa del prior, Felipe II trataba de calmar a su lugarteniente "...y todo lo que a este propósito se os advirtió no fue tanto porque no tuviésemos bien entendida la vigilancia y cuidado que poneis en ello y todo lo demás que toca a nuestro servicio (de lo qual estamos tan satisfechos como es razón), quanto por aver avisado algunos que zelan nuestro servicio y el bien de la justicia, que ellos sabían muy de rayz de personas que yban entre los mismos malhechores, que ninguna cosa temían más que la unión, por ser remedio contra el qual no se podrían prevenir facilmente...", para a continuación aceptar el argumento de que la persecución continua y universal era la única forma de extirpar el mal (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 27r-28v).
- ⁽¹³⁰⁾ Carta al rey de 31 de agosto de 1571 (AZ. Carpeta 175, n° 161), respondida el 29 de septiembre (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 138r-140r).
- ⁽¹³¹⁾ Como señala X. TORRES SANS, op. cit. que se ocupa de este tema en pp. 159-162, de un problema de orden público se creaba un conflicto político.
- ⁽¹³²⁾ Carta al rey de primero de febrero de 1572 (AZ, carpeta 146, n° 132).
- ⁽¹³³⁾ Carta de 9 de marzo de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2293, fols. 160r-161r); las cartas para los diputados en *Ibíd.*, fols. 161v-162r. Repitió la correspondencia el 17 de abril (*Ibíd.*, fol. 179v).
- ⁽¹³⁴⁾ Copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 20v-21v.
- ⁽¹³⁵⁾ DGC, pp. 390-391, y carta de Toledo al rey de 20 de mayo de 1573 (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 482); los enviados a Roma fueron Lluís de Copons, Enric Terré de Picalquiers y Garau de Queralt; a la Corte lo fueron Thomas Pujades y Honofre de Vilaseca.
- ⁽¹³⁶⁾ Sobre este infundio, cartas de Felipe II a don Hernando de 18 de junio y 19 de julio de 1572 (AHN. CS, lib. 2294, fols. 24v-26r, 31v-32r).
- ⁽¹³⁷⁾ Carta del prior al rey, 28 de agosto (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 201); copia de las misivas del rey para los nuevos diputados, en AHN, CS, lib. 2294, fol. 33v.
- ⁽¹³⁸⁾ Cartas de 13 de septiembre y 7 de octubre de 1572 (AZ. Carpeta 146, nums. 151 y 152).
- ⁽¹³⁹⁾ Misiva a don Hernando de 22 de agosto de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 37v-40r).
- ⁽¹⁴⁰⁾ Copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 46v-47v; se trataba de las Cortes de 1542, 1553 y 1564.
- ⁽¹⁴¹⁾ Copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 40v-41v; la lista de cargos en *Ibíd.*, fols. 42r-43r; se debía investigar los temas tratados en las reuniones de Brazos (ilegales, según el rey), la mala administración del pecunio del General, haber hecho, sin licencia real, cárcel privada en la diputación; los dos primeros puntos fueron suspendidos, pero en carta de 13 de septiembre recordaba el tema, y pedía la opinión del prior sobre la oportunidad de su ejecución (*Ibíd.*, fols. 50v-51r).

- ⁽¹⁴²⁾ De la que ya dimos cuenta en el epígrafe 2.3.
- ⁽¹⁴³⁾ Las noticias siguientes se toman de la carta de Toledo al rey de 10 de noviembre de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 154) y del documento anejo (Ibíd. n° 156) titulado "Relación de lo que se ha tractado con los dipputados de Cathaluña acerca la persecución de los ladrones, hasta 6 de noviembre 1572".
- ⁽¹⁴⁴⁾ Carta de Felipe II a los diputados, 5 de octubre de 1572 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 56v-57r); fue respondida el 17 del mismo mes (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 183).
- ⁽¹⁴⁵⁾ Carta al rey de 3 de diciembre de 1572 (AZ. Carpeta 146, n° 157).
- ⁽¹⁴⁶⁾ En la carta que Felipe II envió al prior, como respuesta a la suya de 10 de noviembre (véase *supra* nota 143), adjuntaba la misiva a los diputados, y añadía de su mano: "Muy espantado estoy de como no se a acabado ya este negocio, siendo en tanto beneficio de la tierra y tan necesario para el bien y quietud della, y así procurad que se concluya con brevedad y que dure hasta las primeras Cortes" (AHN. CS, lib. 2294, fols. 65r-66r). Don Hernando narró el efecto de la audiencia con los diputados en carta de 18 de diciembre (AZ. Carpeta 146, n° 160) en la que, ante la intención de los diputados de contestar directamente al monarca, añadió de su propia mano: "Suplico a V. Mag. que no admita a los diputados ninguna disculpa ny oferta, sino que V. Mag. los remyta a mi, que esto es lo que conviene al servicio de V.Mag.".
- ⁽¹⁴⁷⁾ Amplia documentación acerca de estas disposiciones en IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 207; así mismo, los movimientos de la diputación en DGC, pp. 402-403. Los diputados escribieron al rey el 13 de marzo (AZ. Carpeta 176, n° 39).
- ⁽¹⁴⁸⁾ Cartas de los diputados al rey de 28 de abril y primero de junio de 1573 (IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 183). Muestra del impacto que produjo en la diputación el suceso de Igualada es la atención que recibió en el Dietari (DGC, pp. 404-406).
- ⁽¹⁴⁹⁾ Así, el cuatro de mayo el prior escribió al rey para que agradeciera a la diputación sus recientes esfuerzos, y en especial a Agullana y al caballero Ramón Torrelles (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 79r-80v); en efecto, el monarca despachó correo a los diputados (Ibíd. fol. 81r), en respuesta a sus misivas de 13 de marzo y primero de junio (véase *supra*, nota 147 y 148). Don Hernando se reunió con los diputados el 14 de julio para entregarles la correspondencia del monarca (carta al rey de 23 de julio, AZ. Carpeta 175, n° 168; DGC, p. 418); es preciso tener en cuenta también que, por estas fechas Felipe II tenía urgente necesidad de que se pusieran en marcha las 17 galeras que estaban en construcción en las atarazanas, para lo que pedía así mismo la colaboración de los diputados.
- ⁽¹⁵⁰⁾ Sobre esta materia, véase la correspondencia entre el monarca y el prior durante estas semanas en AHN. CS, lib. 2294, fols. 79r-85r; IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 482. De este modo, a primero de julio escribía Felipe II al virrey que "...avemos entendido la confusión y desorden que se ha seguido de no averse assentado lo de la persecución de los malhechores por la forma que más conviniere", para a continuación añadir, "pues desde el principio avia des caydo en la quenta de los fines que dichos dipputados tenían de ampliar su jurisdiction con los pregones que hizieron...", instaba a la conservación de la jurisdicción regia y a que el abogado fiscal siguiera investigando a la *generalitat*.
- ⁽¹⁵¹⁾ Muy expresivo es el Dietari describiendo la entrevista (DGC, p. 421). La cartas del rey, al prior y diputación, están fechadas el 5 de agosto (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 86v-87r). Los diputados enviaron a la Corte a Francesc Serra para defender el procedimiento de las crides (carta de los diputados al rey, 15 de agosto de 1573, IVDJ. Envío 11, caja 20, n° 183), con una rápida reacción del prior, en carta de 29 de agosto (Ibíd. n° 201); por su parte,

el monarca escribió a los diputados el 19 de diciembre, respondiendo a la embajada de Serra, abundando en los argumentos de don Hernando sobre el escaso efecto de las crides y la necesidad de la persecución universal (AHN. CS, lib. 2294, fol. 129); repetiría la correspondencia en parecidos términos el 18 de mayo de 1574 (ibid. fols. 140v-141r).

⁽¹⁵²⁾ DGC, p. 421.

⁽¹⁵³⁾ Además de la documentación que iremos citando, el seguimiento de este espinoso caso se puede hacer a través de dos informes: el primero, titulado "Relación de lo que ha pasado en Consejo sobre el negocio de Forner", realiza un detallado examen de lo acontecido hasta 30 de septiembre (IVDJ. Envío 13, caja 24, n° 105); el segundo, obra del abogado fiscal, Franqueza, alcanza hasta el mes de noviembre, con todos los detalles jurídicos del caso (IVDJ. Envío 11, caja 19, n° 122); bien es verdad que ambos siguen la versión oficial de don Hernando, sobre la situación de los alcaides de los castillos, y su tendencia ocasional al bandolerismo. A. CASALS MARTINEZ, "Estructura defensiva de Catalunya a la primera mitad del seculo XVI: els Comtats de Rosselló i Catalunya". *El Poder Real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI): notas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón* (Jaén, 1993). Zaragoza 1996, tomo 1, vol. II, 83-93, p. 88.

⁽¹⁵⁴⁾ Bula pontificia, cuya publicación anual el día de Jueves Santo había sido reinstaurada por Pío V en 1565, y que suponía la pena de excomunión para aquellos que interfiriesen en la libertad de la Iglesia o amenazasen sus inmunidades. Sobre esta diócesis, véase F. MONT-SALVATGE, *El obispado de Elna*, Olot 1912.

⁽¹⁵⁵⁾ DGC, pp. 422-423.

⁽¹⁵⁶⁾ Carta al rey de 15 de agosto de 1573, con amplia descripción de las correrías de Forner (IVDJ. Envío 13, caja 25, n° 480).

⁽¹⁵⁷⁾ Denominado *Dudum felicitis recordationis*, dado por Julio III en 1551.

⁽¹⁵⁸⁾ Una muestra de la opinión que le merecía el caso a la Inquisición la obtenemos del comentario del inquisidor Francisco de Ribera en carta a la Suprema de 4 de septiembre: "Ya abrán visto v.s. los embaxadores que por parte de la diputación deste principado contra el virrey an hido. La razón que an tenido a sido no con otro fundamento que dar de comer a los que van allí y gastar la Generalidad (...) pues siendo esta de agora [ocasión] más digna de agradecimiento, la tienen por agravio, la qual fue que el virrey hizo dar garrote a un cavallero que le inquietaba la frontera..." (AHN. I, lib. 737, fol. 450v.).

⁽¹⁵⁹⁾ Como apuntaba Antonio Gracián, el 21 de agosto de 1573, en El Escorial: "item [leí] al prior, Velasco y Conde de Chinchón unos despachos del prior don Hernando sobre la muerte de Antonio Forner, sobre lo cual respondí al billete de Gassol y a otros tres del Vicecanciller..." (G. de ANDRES, "Diurnal de Antonio Gracián...", vol. V (1962), p. 124). Más noticias sobre la "junta de los tres" los días 23, 24 y 25 de agosto (ibid. pp. 125 y 126); muestra de la preocupación que suscitó el negocio fue que el secretario Gassol, con la documentación pertinente, fuera llamado a Galapagar, donde permanecían Felipe II y sus principales ministros tras haber dado a luz la reina al infante don Carlos, el día 11 de agosto.

⁽¹⁶⁰⁾ Las copias pertinentes, entre el 13 y el 17 de septiembre, en AHN. CS, lib. 2294, fols. 92r-95r.

⁽¹⁶¹⁾ Expuesta en carta de Felipe II al prior el 26 de septiembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 95r-96v.).

⁽¹⁶²⁾ V. FERRO, op. cit. pp. 129 y ss. Las alusiones a esta concordia en la correspondencia desde la Corte son continuas.

⁽¹⁶³⁾ Véase la carta de Felipe II a la audiencia, de 28 de octubre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 102v-104r).

- ⁽¹⁶⁴⁾ Como agradecía Felipe II el doce de noviembre, respondiendo a carta del prior del cinco, en la que informaba del suceso (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 114v-115r). Hay que apuntar la carta al rey del abogado fiscal Franqueza (siempre dispuesto a defender las posturas del rey), de 25 de noviembre, en respuesta a la suya de día 21 de octubre, exponiendo todos los pasos que había dado en el negocio (IVDJ. Envío 11, caja 19, n° 122).
- ⁽¹⁶⁵⁾ Cartas al prior y audiencia, de 19 de diciembre (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 120r-123r).
- ⁽¹⁶⁶⁾ AHN. CS, lib. 2294, fols. 106-107; el prior informaba al rey de la reprensión hecha a la audiencia en carta de 31 de diciembre (IVDJ. Envío 10, caja 17, fol. 175).
- ⁽¹⁶⁷⁾ Carta al prior de 11 de noviembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fol. 113); en efecto, la misiva al obispo de Elna de la misma fecha era muy moderada (Ibíd. fols. 113v-114r).
- ⁽¹⁶⁸⁾ Para lo que sigue, cartas del rey a Juan de Zúñiga de 19 de diciembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 125r-126r); y viceversa, del diplomático a Felipe II, de 12 de octubre y 20 de noviembre de 1573 (IVDJ. Envío 11, caja 19, nums. 119 y 122).
- ⁽¹⁶⁹⁾ Carta de Felipe II al prior de 19 de diciembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 120r-121v).
- ⁽¹⁷⁰⁾ Cartas del rey a la diputación y al Consejo del Ciento, 2 de mayo de 1574 (copias en AHN. CS, lib. 2294, fol. 142 v.).
- ⁽¹⁷¹⁾ Como señala J. GIL PUJOL, "«Atajar pesadumbres»: propostes governamentals per unes corts generals de la Corona d'Aragó en 1578, no celebrades", *Pedralbes. Revista d'història moderna*, 13 (1993), vol. I, pp. 217-228, p. 220.
- ⁽¹⁷²⁾ AHN. CS, lib. 2294, fols. 135v-136r; el rey insistió de su mano en que partiera solo cuando tuviera la seguridad de que la frontera estaba libre de amenazas.
- ⁽¹⁷³⁾ El 20 de abril (DGC, p. 431).
- ⁽¹⁷⁴⁾ Los puntos que presentó en Consejo de Aragón se pueden deducir de la respuesta que dio el rey a los mismos, en carta al prior de 15 de junio (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 143r-145r); respecto al Consejo de Guerra, el informe se halla en AA, caja 53, fol. 7: "Lo que al prior don Hernando se le ofrece sobre las cosas de Cataluña...", 13 de mayo de 1574.
- ⁽¹⁷⁵⁾ Carta al Duque de Alba, Madrid, mayo de 1574 (AA, caja 52, n° 258).
- ⁽¹⁷⁶⁾ Carta de Felipe II al virrey y a la audiencia, 19 de diciembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 127r-128v).
- ⁽¹⁷⁷⁾ Carta de Felipe II a don Hernando de 26 de septiembre de 1573 (copia en AHN. CS, lib. 2294, fols. 95r-96v).
- ⁽¹⁷⁸⁾ Carta al rey, a finales de 1576 o principios de 1577, donde también realizaba una encendida recomendación del III Conde de Chinchón (IVDJ. Envío 10, caja 17, n° 103).
- ⁽¹⁷⁹⁾ Cartas a Mateo Vázquez y al rey, en 1581 (IVDJ. Envío 11, caja 20, nums. 240 y 241).
- ⁽¹⁸⁰⁾ Carta de Bolea al rey, 23 de julio de 1576, a propósito de la consulta que le hizo el monarca acerca de los candidatos para cubrir la vacante producida por la muerte de Joan Jofre (IVDJ. Envío 10, caja 17, n° 33). Según el vicescanciller, la forma antigua había sido suspendida por el Consejo, que comenzó a sospechar de la capacidad de los doctores para imponer al monarca sus candidatos en detrimento de la real preeminencia. La consecuencia, a decir de Bolea, fue poner en manos del virrey la confección de las listas, sin contar con la resentida audiencia que sólo debía realizar a posteriori el examen preceptivo sobre la calidad de los seleccionados por el soberano. Ignoramos las fechas concretas de esta evolución, si bien cuando entró el prior en 1571, todavía funcionaba el sistema tradicional (por ejemplo, el 6 de marzo el rey escribía a la audiencia para que pusieran en marcha el mecanismo, AHN. CS, lib. 2293, fol. 76v).

- ⁽¹⁸¹⁾ El momento escogido para la propuesta fue el vacío provocado por la muerte del vicecanciller Bolea, en 1585 (la documentación oportuna en IVDJ. Envío 10, caja 17, nums. 127 y 128; sobre la figura del vicecanciller y la polémica de su adscripción a la presidencia, J. ARRIETA ALBERDI, op. cit. pp. 337 y ss., matizando la interpretación de J. LALINDE ABADIA, "El Vicecanciller y la Presidencia del Consejo Supremo de Aragón", *Anuario de Historia del Derecho Español*, 30, (1960), pp. 177-248).